Carlos Real de Azúa

URUGUAY, ¿UNA SOCIEDAD AMORTIGUADORA?

CENTRO DE INFORMACIONES Y ESTUDIOS DEL URUGUAY
EDICIONES DE LA BANDA ORIENTAL

A Milton I. Vanger, en Cambridge (Mass.).
A Paul M. Cohen, en Gainesville (Fl.).
A Peter Winn, en Princeton (N.J.).

Colección
ESTUDIOS SOBRE LA SOCIEDAD URUGUAYA
Nº 3

Carátula:
Sergio López

CIESU
Juan Paullier 1174 - Tel. 40.38.66
Montevideo - Uruguay

EDICIONES DE LA BANDA ORIENTAL SRL.
Gaboto 1582 - Tel. 4.32.06 - Montevideo
Queda hecho el depósito que marca la ley.
Impreso en Uruguay - 1984.

PRESENTACION

En 1973, Carlos Real de Azúa culminaba la redacción de "Uruguay, una sociedad amortiguadora". Inicialmente no incluía los signos de interrogación con que aparece en esta edición. Escrito en la Universidad de Columbia, donde fue "Tinker visiting professor", Real de Azúa intentaba, otra vez, asir su Uruguay, muchas veces confundido con la "circuida realidad montevideana", según sus propias palabras.

Un balance de "constantes e invariantes", en los períodos socio-políticos uruguayos que habían llevado a esa sociedad amortiguadora de conflictos y también a su "amortización", fue el tema de esta reflexión.

Por eso aparecieron luego los signos de interrogación. Poco antes, en 1971, en un recordado trabajo: "Política, poder y partidos en el Uruguay de hoy", incluido en "Uruguay hoy" (Buenos Aires, Siglo XXI, 1971) había hecho un esfuerzo por exponer cuáles serían las alternativas de renovación en esa sociedad *cuyos muros se habían ya agrietado*. Ahora, en 1973, cancelada esa opción, llegaba otra vez el momento de la revisión y, por qué no, de la nostalgia.

Suponía reflexión, y el período de enero a mayo en Nueva York permitió sacarlo de la "urgencia" de la caída de las instituciones que se producía en Uruguay.

A la vuelta, ya era tarde para poder publicarlo. Muchas de las seis "constantes", más o menos "invariantes", se encontraban fuertemente amenazadas y, por primera vez, sufría por sí mismo las consecuencias de la implantación de un estilo de desarrollo "constrictivo", que él analizó hacia 1975, estilo que le hizo perder cargos y ser contado entre los "vencidos".

Por eso creía necesario mantener los signos interrogativos con los que hoy lo publicamos.

Durante once años el manuscrito sólo fue conocido por algunos de sus amigos, pero ya lo suficientemente citado como para

que las fotocopias comenzaran a circular entre otros que no llegaron nunca a conocer a Real de Azúa.

El adelanto de sus conclusiones en una separata publicada por *Jaque* en julio de 1984, avivó aún más el interés por conocer este trabajo. Hijo de la guerra civil española, lo encontró alineado en el falangismo de José Antonio, pero el conocimiento de la otra España, la que "hiela el corazón", produjo un fuerte viraje en su orientación política que lo muestra hacia los años sesenta junto a los hijos de la revolución cubana, intentando una *renovatio ab imis*, como sostiene su viejo amigo Halperin Donghi, pero también añorando el Uruguay batllista sobre el que hizo una *Krinein* (un juzgar sobre la realidad dada) en "El impulso y su freno" (Montevideo, Ediciones de la Banda Oriental, 1964).

Los hijos del tiempo del silencio recién comienzan a conocer a Real de Azúa y quienes fuimos sus discípulos tenemos la obligación de publicar este libro para ellos y para quienes le precedieron y también lo sufrieron. Es el necesario aporte a una "historia útil" que siempre reclamó "Carlitos".

Juan Rial
noviembre de 1984.

PREFACIO

Este texto, que es cabalmente un "ensayo" (y esto aun en el sentido peyorativo de la palabra) fue escrito en Nueva York en el curso de los meses de abril y mayo de 1973. Como su especial carácter exige precisa datación, recuerdo por ello que su composición es posterior a los sucesos del 8 y 9 de febrero de 1973 (y en especial a como hubieron de ponderarse a la distancia) y anterior, asimismo, a todo lo ocurrido a partir del 27 de junio. Mientras dictaba en la Universidad de Columbia un curso sobre "Neo-autoritarismo y cambio político en América Latina" y en el que la gran masa factual de la Argentina y el Brasil desplazaba inexorablemente al "caso uruguayo", también me resultaba imposible de esquivar la reflexión comparativa entre el curso histórico y presente de nuestros vecinos y el proceso seguido por el rincón uruguayo. Ahora, en que algunos de los amortiguadores de esta "sociedad amortiguadora" sobre la que teorizo parecen haberse roto más allá de todo remiendo, quede el texto tal como fue concebido, si es que a alguien consigue interesar, y en su doble carácter de testimonio de un estado de percepción desde un preciso tiempo y un preciso lugar y de borrador sujeto a las rectificaciones y a las descalificaciones que puedan imprimirle todo el tiempo corrido tras él y los sucesos que trajo.

Carlos Real de Azúa
Diciembre de 1973

1. Sobre el concepto de amortiguación

Han corrido hasta nuestros días un par de calificativos condescendientes, ambos ligeramente humorísticos, que comentaron en su hora o algo después la creación de un Estado nacional, formalmente soberano entre esas dos grandes áreas, todavía débilmente integradas, que eran la Confederación Argentina y el Imperio del Brasil. Es recordada a menudo la del "algodón entre dos cristales", que evita su rotura, y en esta ocasión no habré de recurrir a ella. Voy a seguir la pista, en cambio, de la segunda, tan conocida como la anterior, de un "Estado amortiguador" (a Buffer State) concebido para amortiguar la eventual colisión de dos masas ingentes. Recojo entonces de la fórmula su último término —sustantivo y adjetivo a la vez— y evito desde el punto de partida la cuestión algo sofisticada de que puedan existir relaciones posibles (o necesarias) entre esa acción de amortiguación hacia afuera para la que la nueva entidad nacional fue promovida y la que dentro de la misma —en su interior— se produzca.

Con tal descarte o sin él hay que reconocer lo evidente y esto es que la idea nace de un modo puramente analógico y verbal, lo que representa un "estilo del pensar", como diría D'Ors, que para muchos puede valer como tacha de descalificación. Aun reconociéndole, voy a comprometerme en lo que sigue con la presunción de que sólo la índole de las reflexiones que el calificativo sea capaz de provocar será la que falle en última instancia sobre la idoneidad de un método que empieza en un encuentro con el azar. Puesta a un lado la escalera, dejado el andador al margen, el tema estará enhiesto o en el suelo, sin remisión y sin confusión posibles.

"Sociedad amortiguada" y "sociedad amortiguadora", diré o podré decir indiferentemente. Porque no hay contradicción entre suponer que el tejido de interacciones que adensa una sociedad presente una característica regular y dominante que da su sello a la sociedad toda y que este sello, este trazo impuesto a la sociedad

refluya a su vez, dialécticamente, sobre cada uno de sus elementos.

La opinión de que en el Uruguay los conflictos sociales y políticos no llegan a la explosión, de que toda tensión se "compone" o "compromete", al final, en un acuerdo, la propensión "irénica" [1] o anticatastrófica que parecerían tener los antagonismos uruguayos, no es ciertamente una concepción del presente, puesto que más bien militan a contrariarla muchas representaciones actuales del país. Como veremos, en cambio, no deja de tener ilustres y corroborativos modelos en nuestro pasado, además de pertenecer a nivel de "supuesto" —esto es, de modo difuso— a todo un patrimonio clásico de certidumbres colectivas, no del todo, aun, disipado.

Si desde el presente la juzgamos —y es bueno apuntarlo para disipar desde ahora malos entendidos— la de una "sociedad amortiguante" está lejos de ser una creencia conformista y, sobre todo, optimista. Por el contrario, más bien puede integrar el legado de convicciones deprimentes y hasta fatalistas que muchos uruguayos abrigan sobre su nación. También hay (siempre hay) es claro una tercera posición y que es la que aquí voy a tratar de adoptar. Es la de intentar la verificación o la dimisión del calificativo con esa suspensión emocional, con esa voluntad de relevar todos los aspectos de la realidad, estimulantes o no, que no sólo es, lisa y llanamente, la actitud de la ciencia sino también la postura (que querría fuera la mía) de todo tipo de pensamiento que a la ciencia trata de acercarse.

Convendría aclarar asimismo que para que no sea la amortiguación uruguaya un presupuesto optimista no es necesario suponer que se comparta la doctrina de la extremización de todos los males para que de ellos salga el bien, un trámite cuyos costos sociales son por lo regular tremendamente altos y que para despertar entusiasmo exige, por lo menos en la parte que me toca, una mayor seguridad de la que tengo en lo que el "bien", o "lo positivo", o la "antítesis" puedan ser. En realidad, no es necesaria una visión dialéctica "tout court" para sentir el escaso atractivo que

(1) Uso las expresiones propuestas por Francois Bourricaud en "Aportes", Paris, Nº 1, p. 151.

puede suscitar este reino del "casi", este curso de una sociedad que, como alegaré, fue "casi-colonial", "casi-desarrollada-hacia-afuera", "casi-democrático-radical-modernizada-Estado de bienestar", "casi-populista", "casi-fascista-colonial" (u otro rótulo más adecuado) y hoy parecería comenzar a ser un "casi" algo nebuloso sin abandonar todos los rasgos de la penúltima (¿o "casi-última"?) etapa.

Digamos ahora, sin embargo, que si nada tiene de "panglosiana" esta percepción, esta noción que, sin esperanza y sin encono, quiero desarrollar, tampoco pretende el escamoteo o el soslayo de ningún sector de la realidad. Desde el maltrato colonial del paisanaje no-encuadrado, el exterminio casi masivo que conllevó la resistencia artiguista ante la invasión portuguesa, la represión de la Provincia Cisplatina, la destrucción del indio, la generalizada crueldad de las guerras civiles, la marginación y miseria del peonaje a fines del ochocientos, las condiciones de vida, alimentación, salud y educación de vastos sectores de la ciudad en la presente centuria; desde todos esos rubros, digo, a la dialéctica de subversión-represión de estos últimos años, la historia uruguaya está tan henchida como cualquiera otra de esa alta cuota de muerte, violencia, miseria y sufrimiento injusto que ha sobretejido suntuosamente la textura de la vida de los pueblos.

Porque no ha sido, en verdad, la sociedad uruguaya una sociedad de bajas tensiones aunque sí no lo haya sido de tensiones extremosas. Todo ocurre en todos lados, dijo alguna vez sensatamente Marías, y la estimación importante es saber en qué grado, con qué cuantía ocurre. Aunque esto provoque desdén en un modo de producción intelectual dominante que sólo atiende a las opciones tajantes, lo muchas veces decisivo puede no ser el "sí" y el "no", el "cero-suma", sino el "más" y el "menos". Quede claro, empero, que este alegato por el "menos" nunca pretende acercar ese menos al cero ni negar zonas de alta tensión que queden a algún costado de su argumento. Vale la pena recordar que son los antagonismos promediales de un siglo y medio de historia los que habrán de interesarnos y vale la pena también afirmar que su sentido no tiene por qué enfrentarse con la invocación polémica al dramatismo —inocultable, inolvidable— de estos últimos años.

Pero el mismo concepto de "amortiguación social" posee, por

poco que se lo someta a un elemental examen, una latitud de significados entre los que importa precisar con cuál habré de manejarme. Tal vez algún día (aunque mucho lo dudo) las técnicas de la ciencia social puedan cuantificar rigurosamente la intensidad de los intereses, las pasiones y las "cargas de voluntad" que alimentan los conflictos. Tal vez puedan también medir los costos sociales y humanos de toda necesidad colectiva que no haya llegado al umbral de poder suficiente para poder entablar el conflicto abierto por falta de recursos para hacerlo, sean ellos la incultura, la marginación, la pobreza, la represión o cualesquiera otros lastres de similar entidad.

Como repito, el enfoque de que ha de partirse no implica ninguna idealización de la integración o del consenso, del tipo de las que abunda la sociología conformista y si digo simplemente que descarto tal análisis no es sólo porque la alternativa no posee medios actuales para llegar a buen fin sino porque nuestro interés presente ha de apuntar hacia otra meta. Ha de suponerse también que si a cada uno de los trazos amortiguantes que subrayaré [2] se le opusiera toda la evidencia empírica posible con intención de réplica o antítesis no es forzoso entender cancelado el esquema por obra de tantos o cuantos ejemplos: de lo que se trata aquí es de tendencias dominantes y cuando ese es el caso la manera idónea de refutarlas es una ponderación cuidadosa de lo que aparecería en uno y otro platillo de la balanza. Podrá decirse, y es cierto, que este planteo tampoco trae a colación la masa de hechos en que se apoya, lo que bien podría dar lugar a un reconocimiento, no carente de cierto escepticismo. Una interpretación histórica, en puridad, —y ésta es inocultablemente una de ellas— comparte con otras artes y artificios del hombre una radical insuficiencia en términos de fundamentación y en términos de verificabilidad. Si se la pesa de acuerdo a las pautas más exigentes de la ciencia eso es lo que resulta, lo que la pone en condición de propuesta que se acepta o se rechaza en base a los medios de persuasión que sepa

(2) Por ejemplo: a la debilidad de la Iglesia colonial el hecho de que existieron una imposición y una transculturación religiosas; a mi tesis de la endeblez de la clase económicamente superior el hecho de que hubo una clase alta, apoyada en relaciones de dominación y explotación, etc.

usar y a los efectos de convicción que obtenga. "A beneficio de inventario", "a crédito", en el sentido más riguroso del vocablo. No más, aceptémoslo, pero mucha historia que se cree científica no está hecha de otra pasta.

Hay otra acepción posible de amortiguación social que también debe descartarse. Partiría de suponer que en un país geográficamente pequeño, habitado por una población reducida y más integrada espacial, racial y socialmente que cualquiera otra de Latinoamérica, en este país "tan fácil de arreglar" que algunos diagnostican, los conflictos, las tensiones son, de alguna manera más manuables, más enjugables que en sociedades globales de gran densidad o asentadas sobre vastos territorios. Si, por una parte, esta tesis parece atractiva aunque igualmente tan insegura como todo lo que tiene que ver con la "dimensión nacional" y su significado (una cuestión de teorización aún muy incipiente) por otra parte una conclusión adversa se adelanta. Y es la de que como muchas variables de una sociedad son en cierto modo proporcionales entre sí (territorio, población, distancias sociales, tensiones y conflictos abiertos, posibilidades de control) la reducida dimensión no es una garantía de apacibilidad ni mucho menos. Cualquier lector de Tucídides, de Ibn-Khaldún y de Maquiavelo lo sabe. En suma: como lo prueba la historia de la ciudad griega, norafricana o italiana, los choques pueden ser tan violentos y tan letales dentro de un ámbito limitado como en el gran espacio de las mayores comunidades.

Partiré entonces por otra vía. Lo haré, más modestamente, de suponer el curso de la historia del país uruguayo pautable en ciertas secuencias de sentido unitario (períodos, o etapas, o épocas) recurriendo para la caracterización de esas secuencias a determinadas variables de índole social, política, económica e ideológica. Para cumplir esta tarea, que es de la índole de las llamadas "configurativas", sigo la pista de algunas periodizaciones muy difundidas (Germani, fundamentalmente, algunas ideas de F.H. Cardoso) de la historia latinoamericana. Pero interesa en especial cómo cada etapa se manifestó en las naciones vecinas de Brasil y Argentina y aun el contorno que asumió en esa provincia de Buenos Aires que es, en dimensión, origen y proceso social la me-

jor unidad-base de todas las concebibles para una comparación esclarecedora con el curso histórico del Uruguay [3]. El fenómeno de la amortiguación se hace así ostensible —según intentaré mostrarlo— cuando se realiza el cotejo entre cada una de las secuencias nacionales que se identifiquen y cada una de las correspondientes al desarrollo latinoamericano y comarcal.

Todo conocimiento de un ente, de un proceso, de un fenómeno es siempre, en alguna medida, comparación. Ello en cuanto descansa inevitablemente en el acto de recortar el objeto a conocer de un contexto en el que está intrincado pero con el que presenta también diferencias advertibles. Por eso, en un intento como el presente, el análisis comparativo, que no es estrictamente un "método", formalmente entendido, es doblemente inevitable. Y sobre su base tiene que moverse cualquier argumentación idónea y aun cualquiera penosa, una alternativa cuya decisión puede depender de la habilidad con que presten su concurso a la historia convencional la sociología, la economía, la teoría política y, en general, las ciencias del hombre y la sociedad. De todas ellas —y la situación no se circunscribe al caso presente— viene el repertorio de preguntas a hacerle a los procesos y a los acontecimientos para que estos den todo el posible jugo de su significado y no se queden, en "estado bruto", al mero nivel narrativo [4].

Dentro de la pluralidad de perspectivas que ese concurso hace factible podrá advertirse, creo, una primacía a la atención por las modalidades políticas dominantes en que se articuló cada período pero igualmente supongo que se percibirá el cuidado por subrayar que ese "centro político" sólo se hace inteligible si —sin solución de continuidad— se atiende también al contorno social, económico, cultural y técnico que condiciona la posición y la función de ese centro. La constante que representa la amortiguación, concluyamos con esto, no implica tanto, así, una aminoración de las tensiones políticas ostensibles ni aun siquiera las del conflicto social que subyazga en ellas, aunque esos fenómenos reductivos puedan producirse bastante regularmente. Mas bien habrá de acentuarse la noción de una "debilidad de implantación" de los sistemas de poder político y social capaces de caracterizar cada etapa. Esa debilidad de implantación, agrego, implicará en la historia del país mayores posibilidades de manifestación para determinadas corrientes o fenómenos no-dominantes, ya sea por "remanentes", ya sea por "incipientes", que facilitaron la transición hacia la etapa que siguió y la hicieron más fluida, menos costosamente conflictual. Esto no significa negar la invención histórica (un tema que se ha debatido a propósito de la obra de Batlle) sino, simplemente, a hacerla posible [5]. Tal vez se haga posible mostrar en lo que sigue que la general modestia —en entidad e impacto— de esos fenómenos de incipiencia los hubiera hecho incapaces las más de las veces (y esto pudo ocurrir también en la primera década del siglo XX) de romper la caparazón del "statu quo" sin la creación política inventiva desencadenante. Es la contingencia que mostró en el país su faz promisoria y humana en 1911 y desde 1968 una tan diferente de aquella (su semblante agrio, prepotente y cruel).

(3) En este sentido, mis vagas reflexiones de bastante tiempo atrás sobre la necesidad de un estudio comparativo global, de una sociología histórica comparada del Uruguay y la provincia de Buenos Aires, se vieron incentivadas por la lectura del penetrante trabajo de Paul M. Cohen y Peter Winn: "Argentina and Uruguay: the transition from Elite to Mass Politics", New York, Center of Inter-American Relations, s.a.

(4) O aun pasar más allá de ciertas antítesis (campo-ciudad; caudillos-doctores; extranjerismo-orientalismo) que han dado seguramente todo el jugo que podían dar.

2. Una implantación colonial débil y tardía

Es ya un lugar común de la historiografía uruguaya destacar la demora con que la administración española emprendió la organización de la zona oriental del Plata y lo precaria que resultó —con el término extintivo de 1814 a la vista— toda la construcción.

Ultima porción, entonces, del Reino de Indias que pareció

(5) Subrayo el título y la tesis de la definitiva obra de Milton Vanger: "José Batlle y Ordóñez: the creator of his times", Cambridge, Harvard University Press, 1963. El subtítulo de la traducción argentina (en EUDEBA) es divertidamente absurdo: Batlle "Pensador, Político, Historiador, Antropólogo" (sic).

merecer metódico cuidado —y ello bajo el acicate de pretensiones rivales— sin masas indígenas aptas para su reducción a servidumbre [6] y aun sin esas riquezas minerales de importancia ni esas posibilidades climáticas para una retributiva "agricultura de plantación" que hubieran llevado a paliar el déficit laboral por cualquier medio, la gobernación instalada en Montevideo desde 1750 fue un producto típico de la política borbónica. Lo que quiere decir también que llevó mucho más borrados los trazos que caracterizaron a la sociedad colonial en las regiones de primera implantación. Esta dilución, que no es ausencia, se advierte así actuando sobre la primordial función de la Iglesia, sobre una acción de intensiva y compulsiva evangelización, sobre una actividad económica pautada por normas mercantilistas y monopolistas de alto rigor, sobre una estructura social sostenida en estrictos vínculos de dominio y subordinación, sobre una minuciosa exclusión de todo contingente foráneo y, en especial, no-católico.

La debilidad que ostentaron así en la Banda Oriental los elementos caracterizadores ideales del sistema colonial ha sido reiteradamente destacada y ponderada por nuestra historiografía pero, en puridad, sólo a los efectos de subrayar la fluidez con que la región oriental hizo suyos (como si le hubieran sido consustanciales) los contenidos sociales e ideológicos democráticos cuyo curso tornaron posible (no, por cierto, inevitable) la ruptura del Imperio y el dinamismo insurreccional superviniente.

Aunque, de seguro, la historia uruguaya no soportaría una interpretación del tipo de la de Frederick Jackson Turner, creo, en cambio, que el carácter "fronterizo" de la implantación uruguaya no ha sido tal vez subrayado lo suficiente. La frontera, en cuanto zona de indefinición de jurisdicciones, de intensa movilidad horizontal generalmente clandestina o semiclandestina, generalmente facilitada por lo borroso, inestable y a menudo contradictorio del estatuto jurídico de la propiedad, pesó mucho en el curso histórico del país. Esto, tanto en el sentido de un intenso aunque esporádico cuidado militar como en el de un roce y

(6) Algunas tentativas en tal dirección realizadas durante el curso del siglo XVII en el litoral fracasaron totalmente. V. Horacio Arredondo: "La Civilización del Uruguay", Montevideo, 1951, t. I, p. 32.

conflicto de jurisdicciones —la de Buenos Aires, la de Yapeyú, la de Montevideo— que facilitaron, junto a la estricta condición geográfica, física, de la región su carácter de zona de "razzias" y "correrías". Fue desde las costas del este, desde el litoral, desde el norte que irrumpieron a menudo portugueses y tribus indígenas, faeneros y changadores, piratas y corsarios de variados pelajes europeos. Se hace así explicable que tales factores hicieran mucho para que, unidos todos ellos a lo tardío de la distribución más o menos formal de la tierra, el sistema de propiedad fundiaria no fuera un modelo de precisión. Para que careciera, sobre todo, de la fijeza y estabilidad que en otras zonas del dominio español fue capaz de tener en cuanto apoyo al poder económico de un sector social terrateniente [7].

Pero en una sociedad de primitiva tecnología el poder de un grupo social dominante poco sostén posee en las cosas sino se complementa con la cuantía de una masa humana dominada. La clase económica prevaleciente en la Banda Oriental contó, como es obvio, con gentes bajo su dependencia, pero aquí también es cuestión de "cuántas" y de "en qué medida", siendo de creer que en ambas variables el poder, la extensión de la imposición social del sector elevado fue más débil que en casi todas las otras regiones del Imperio hispánico. En esto no sólo tuvo que ver la carencia ya aludida de indios reducibles a servidumbre y el alto costo e independencia del artesanado libre de la ciudad [8] sino dos

(7) A este respecto el volumen editado por el Ministerio de Hacienda: "Colección de documentos para la historia económica y financiera de la República Oriental del Uruguay", t. I:"Tierras: 1734-1810", Montevideo, MCMLXIV y el conjunto de estudios de Julio C. Rodríguez, Lucía S. de Touron y Nelson de La Torre que integran "Evolución económica de la Banda Oriental" (1967), "La estructura económico social de la Colonia" (1967), "La revolución agraria artiguista" (1969), "La oligarquía oriental en la Cisplatina" (1970), "Después de Artigas" (1972) —todos editados por "Pueblos Unidos" y "Artigas: Tierra y Revolución", Bolsilibros Arca, 1967. Agrego que, a mi juicio, y pese a su obvio valor, el conjunto enfatiza en exceso el conflicto sobre la propiedad y aun sobre la mera propiedad y posesión de los campos, soslayando la significación económica de la unidad empresaria y el ganado, así como una relación de su rendimiento con la propiedad urbana, la gestión mercantil y la función administrativa así como toda cuantificación —aun tentativa— de estas relaciones.

(8) La mayoría de los testimonios han destacado la realidad rioplatense de

factibles y más decisivos contingentes humanos restantes.

La relativamente escasa cuantía de la esclavitud negra (y ella, en especial, en cotejo con las sociedades luso-españolas del trópico) representó fenómeno general en las zonas templadas y de economía ganadera del dominio español. Hay inventarios sucesorios como están igualmente las listas del Exodo artiguista de 1811 que permiten una razonable aunque algo vaga estimación, así como advertir qué alta era la proporción del contingente aplicado al servicio doméstico [9]. Esta fue probablemente la tendencia general, pese a la condición de un Montevideo convertido en centro de los contratos de "Asiento" y distribución de esclavos a otras zonas del sur y pese también a las excepciones significativas que representaron la intensa aplicación de mano de obra servil en algunas estancias de la zona coloniense y al caso particular y bastante escandaloso de los dominios de los García Zúñiga [10].

Junto a la modalidad peculiar que en la incipiente sociedad oriental asumió la esclavitud del negro debe colacionarse la aun

una sociedad sin obreros y con escasos artesanos, bastante bien pagos en caso de existir, situación por lo menos dominante hasta 1850. V. Un inglés: "Cinco años en la Argentina", Buenos Aires, Solar, 1942, p. 6, Manfred Kossock: "El virreinato del Río de la Plata: su estructura económico-social", Buenos Aires, Editorial Futuro, 1959, págs. 24, 25, 87 et passim; Jorge Soler Vilardebó: "D. Miguel Antonio Vilardebó y su época", Montevideo, 1936, p. 73; **Horacio Arredondo: "Los Apuntes estadísticos" del Dr. Andrés Lamas".** Revista del Instituto Histórico y Geográfico del Uruguay, Montevideo, t. VI, Nº 1, pág. 92, 1928.

(9) V. Museo Histórico Nacional: "Exodo del Pueblo Oriental. 1811", Montevideo, s.a. (¿1930?) —datos sobre Felipe Flores y otros—; Mariano B. Berro: "La agricultura colonial" Montevideo, Dornaleche, 1914, p. 70; Eduardo Acevedo: "Anales históricos del Uruguay", Montevideo, Casa A. Barreiro y Ramos, 1933, t. II, p. 434 —datos de 1853. Todos ellos permiten establecer no sólo la relativa cuantía de la esclavitud sino su aplicación a la actividad no-productiva de la servidumbre casera (con la excepción, bastante numerosa, del esclavo que trabajaba para sus dueños como artesano).

(10) V. entre otros, Ricardo D. Campos: "El Brigadier General Dr. Thomas García de Zúñiga - Grandes hombres de la Provincia Oriental", Montevideo, 1946, p. 37 (207 esclavos existían en las estancias de Juan Francisco García de Zúñiga en 1815) y aun posteriormente un verdadero "criadero" de ellos en las de su hijo. Ruben H. Zorrilla: "Extracción social de los caudillos", Buenos Aires, La Pléyade, 1972, p. 168, destaca concorde con Tulio Halperin, la importancia de la mano de obra negra e indígena en las estancias del norte y el litoral argentinos.

más decisiva, amplia y duradera configuración del pobrerío paisano trabajador y formalmente libre. La existencia de una población rural dispersa, de inestable asentamiento y aún sin controles efectivos para la represión de una tendencia a la trashumancia que más tarde se acentuaría fue la base de nuestro "peonaje" [11]. Constituyó un estrato social que únicamente se hizo "masa" en las guerras revolucionarias y civiles y sólo en la primera de esas coyunturas y aun muy esporádicamente, potencialmente peligroso para la ordenación social vigente. De cualquier manera —y la cuestión "magnitud" es aquí decisiva— no parece discutible la aserción de que, por lo menos hasta 1870, será una base débil para una sociedad estable y firmemente jerarquizada, un factor de endeblez para el poder de la cumbre social, una variable independiente a tener en cuenta para futuros conflictos.

La índole "secular" de esos conflictos futuros y aun de otros anteriores ha sido igualmente una característica de las tensiones sociales e ideológicas uruguayas. "La estrella más apagada del firmamento católico de América", como el chileno Eyzaguirre llamara después a la Iglesia oriental, ya lo estaba **bastante en 1767** cuando, en ocasión de la expulsión de la Compañía de Jesús de los dominios americanos de España el acto suscitó en la Banda Oriental el mínimo de protestas que en todo el Reino de Indias se registró [12].

(11) V. mi artículo "Varias hipótesis sobre el peonaje", en "Epoca", de Montevideo, 10 de setiembre de 1965. En E. Acevedo, "Anales", cit. t. I, Montevideo, 1933, p. 37, testimonio de Santos Uriarte sobre el alto costo del peón rural; Alicia Vidaurreta de Tjarks: "Tres intentos separatistas del general Rivera: las misiones Carriego, Aberastury y Lecocq: 1831-1832", Universidad Nacional de Córdoba, 1965, p. 511 (sobre la falta de brazos en campaña); sobre la política de paliarla con importación de personal paraguayo, el importante testimonio de John Mawe: "Travels in the interior of Brasil including a voyage to the Rio de la Plata and an historical sketch of the Revolution of Buenos Aires", London, Longman, Hurst, Rees, Ormes and Brown, 1812, p. 21 (en la estancia de Juan Martínez, en Barriga Negra). No ha sido sistemáticamente investigada en el Uruguay y aun parecería que se evitase el tema, la cuestión de la imposición de la papeleta policial o de conchavo al elemento rural, desde los tiempos de la Revolución. Sobre tentativas de aplicación en el Uruguay: Acevedo, "Anales", cit. t. I, pág. 423.

(12) En Carlos Ferrés: "Epoca colonial. La Compañía de Jesús en Montevideo", Barcelona, Luis Gilli, 1920. También datos importantes sobre los comportamientos religiosos del estamento mercantil en José Torre Revello: "Del Montevideo

Por otra parte, la Banda de oriente con sus características socio-culturales fue, más que otra cosa, un resultado de la expansión de la "ciudad-puerto" y lo que Montevideo era y seguiría siendo importó una variante decisiva para la sociedad que en torno suyo se iba peculiarizando. Es justamente aquí —es de suponer— que se registran dos diferencias fundamentales entre Montevideo y Buenos Aires y las respectivas futuras funciones que habrían de cumplir en las colectividades que tras de ellas se fueron organizando. Una de ellas, en la coyuntura, marcará todo el proceso revolucionario. Y es que con ventajas y condiciones naturales (posición, profundidad de aguas) muy superiores a las de Buenos Aires, el crecimiento montevideano hubo de afrontar, prácticamente sin pausas, el antagonismo corporativo del comercio porteño y aun la minuciosa, urticante puesta de obstáculos por parte de la administración virreinal. La historia clásica uruguaya ha subrayado y aun enfatizado este proceso con el fin de explicar el origen y las modulaciones del sentimiento autonomista oriental. En esta ocasión no es, sin embargo, ese antagonismo el que ha de interesarnos sino el traer a colación la existencia de esos dos permanentes asedios —comercial y administrativo— que el sector alto de la capital oriental debió enfrentar y no siempre con éxito. Pues él tuvo bastante que ver —y es afirmación moderada— con la mucho más floja tradición de dominación que la clase comercial dirigente montevideana contará entre sus recursos, comparado ello, sobre todo, con los que disponía la correspondiente porteña hacia 1810 y 1811.

Pero entonces, ya en el torbellino de las decisiones inaplazables, otro factor, como se aludió, será el decisivo. Base naval esencial de España en el Atlántico Sur —como lo sería después, hasta 1870, de todos los "escuadrones" navales de las potencias europeas [13]— Montevideo quedó hasta 1814 en manos de las

del siglo XVIII". Revista del Instituto Histórico y Geográfico", t. VI, Nº 2, Montevideo. 1929, p. 650.

(13) V. Homero Martínez Montero: "El triunfo del mar", Montevideo, 1937, "Significación marítima de Montevideo en los siglos XVIII y XIX", Montevideo, Publicaciones del Instituto Uruguayo de Cultura Hispánica, 1956 y "El Apostadero Naval de Montevideo", Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Instituto de Historia), 1968. Sobre la presencia de escuadrones de otros países:

fuerzas leales a las autoridades residentes en España. La revolución, es decir, todo lo que siguió en la primera década posterior a la disolución del vínculo imperial, se hizo sin la ciudad y aun contra la ciudad, una resistencia, una ausencia que le dará a su rol del futuro trazos muy peculiares.

3. Unos "tiempos revueltos" muy costosos

La conocida periodización de Germani designa como "independencia y anarquía" a la etapa que siguió a los acontecimientos que entre 1809 y 1811 se produjeron en Hispanoamérica. Se trata de un rótulo no demasiado inventivo para mentar un proceso en el que todos los elementos —los grupos sociales, las ideas, los intereses, las filiaciones nacionales, regionales y raciales, los proyectos de acción y los respectivos apoyos externos (Gran Bretaña, Francia, Portugal-Brasil)— que involucraban, todos, prácticamente, parecieron entrar en un dinamismo bastante enloquecedor y acercarse y comprometerse, chocar y contradecirse de manera tal, que el larguísimo repertorio de posibilidades combinatorias, la enumeración, en suma, resulta la mejor —y tal vez la única— clave de intelección a seguir. Esto quiere decir también que si hemos de sujetarnos aquí al procedimiento planeado de comparar la configuración oriental con la general hispanoamericana y con la más específica comarcal, el obstáculo está en que el posible modelo general resulta demasiado esquemático e indeciso para servirnos y que representando el brasileño un proceso independentista totalmente atípico sólo se puede recurrir al cotejo con el curso de los acontecimientos tal como se manifestó al otro lado del río, y desde allí hasta los Andes y las tierras del Altiplano. El cotejo de similitudes y diferencias con el vecino y en parte común argentino permite con todo marcar algunas particularidades del proceso insurreccional uruguayo que estarían tan cargadas de

Héctor R. Ratto: "Los comodoros británicos de estación en el Plata, 1810-1852", Buenos Aires, Biblioteca de la Sociedad de Historia Argentina XVII, Buenos Aires, 1945 y Robin A. Humphreys (edit): "The Navy Station in South America", Davy Records Society, London, 1962.

consecuencias para el futuro que no es arriesgado sostener que el angostamiento de los términos de comparación no implica desventaja alguna.

Registramos muy sintéticamente las de mayor alcance.

Con una base económica agro-comercial en manos de una clase propietaria asentada en el país o que rápidamente se nacionalizaría, la región uruguaya se colocó desde entonces en posición lejana al sistema de las llamadas "economías de enclave". Tal rasgo, explicado fehacientemente por la naturaleza de la explotación ganadera dominante lo compartió la Banda con las zonas argentinas aledañas. Sin embargo, y a diferencia de lo que ocurrió poco más allá de la región estrictamente porteña un nuevo e importante desfasamiento es el que representó aquí la general imposición británica del librecambio y que es el no haber tenido ésta en el país los efectos tan sustancialmente negativos que en buena parte de las provincias argentinas se registraron. Sea la pequeñez del ámbito territorial, sea la real incipiencia de las actividades manuales de transformación, lo cierto es que en el Uruguay la entrada masiva de la mercadería extranjera no afectó ni desató los conflictos sociales, abiertos o embozados que en el litoral, centro y norte de la cuenca platense tanto tuvieron que ver con la irrupción federal y la violencia que la caracterizó [14].

Desencadenado en 1811 el proceso insurreccional bajo la dirección de la clase terrateniente criolla ha sido ya tradicionalmente subrayado el carácter agrario, "paisano" que adoptó la movilización de la "admirable alarma" así como la índole superviniente de la incorporación a ella de lo que ya pudiera configurar una "élite urbana unificada". Pero también vale la pena destacar que aquel extendido levantamiento rural se dinamizó con toda probabilidad a través de un oscuro proceso de legitimación, de un ejercicio de compensaciones que no parece incorrecto llamar "retributivo" y aun lo parece menos si repasamos las otras alternativas de una efectiva motivación de las acciones. Esto implica descartar, en primer término, el más o menos inverificable operar de

(14) Sobre el tema la clásica obra de Miron Burgin: "Aspectos económicos del federalismo argentino", Buenos Aires, Hachette, 1960 y la reciente de Tulio Halperin Donghi: "Revolución y guerra", Buenos Aires, Siglo XXI, 1972.

una fascinación de tipo "carismático", de un atractivo que a Artigas sólo le llegó por sus obras y el ejercicio concreto del liderazgo y no, probablemente, por una multiplicación de aquellos "mozos alucinados" de los fogones rurales. También implica descalificar la posible influencia de una "legitimación tradicional" que resulta altamente improbable en la escasísima densidad que en pautas y valores trasmitidos con necesaria persistencia de generaciones presentaba una región nueva y de frontera. Tampoco, por fin, esos mismos determinantes y aún el "nivel" cultural en su sentido genérico hacen concebible, posible la acción de ningún tipo de "legitimación ideológica" cabalmente tal y a plano multitudinario [15].

Cierto es que este proceso de movilización fue cortado por la dominación cisplatina, así como se reanudó parcialmente —pero es probable que con menor intensidad— entre 1825 y 1827 y se virtió más tarde, prácticamente aquí sin ruptura de continuidad, en la formación de los séquitos populares de los caudillos y de los partidos Blanco y Colorado (1838-1842). En la segunda parte del siglo XIX esa movilización se mantendría como una potencialidad, como una latencia que ya bajo encuadramiento partidario o en modalidades más inarticuladas y anárquicas proporcionó una masa de maniobra a las insurrecciones políticas de base rural hasta 1910.

Se hizo referencia ya a la índole mediatizada o, mejor, al desarrollo coartado de la clase dirigente económica montevideana y a las consecuencias que para la relación revolucionaria entre élite y masa tuvo la permanencia de la ciudad en manos españolas hasta 1814. Pero esta tardanza —llamémosla así— en acceder al liderazgo social no hubiera constituido un fenómeno de abrumadora significación dada la existencia de otra élite —ésta rural-urbana— actuante. Era la compuesta por hombres que primero acompañaron a Artigas, después se desentendieron de él y aun lo enfrentaron llevados por una pluralidad de motivaciones (que no admite la drástica condena que hoy se estila) y, prácticamente de

(15) Sobre la aplicación de las nociones de legitimidad a la realidad histórica del caudillismo mi trabajo "Legitimidad, apoyo y poder político", Montevideo, Fundación de Cultura Universitaria, 1969, págs. 108-126.

seguido, condescendieron con la dominación portugo-brasileña y aun la apoyaron en muy variable grado. Hay que recurrir entonces a otros determinantes para explicar aquella debilidad, pues todos son factores que interactúan para configurar una realidad grupal diametralmente opuesta a la del —pongamos por caso— relativamente unificado sector dirigente porteño (y aun contando en él la escisión funcional entre su vertiente política y su vertiente económica).

Si sumamos los efectos de la revolución agraria artiguista [16], las confiscaciones decretadas y efectivadas en los bienes del enemigo político español o porteño y el extendido despojo de tipo "sultanista" [17] que significó la dominación cisplatina y aun la acción previa de jefecillos independentistas se hace ostensible que una de las constantes del desarrollo nacional ya se registró entonces. Me refiero, como es de prever, al alto índice de vulnerabilidad de la propiedad agraria, causante a su vez de la acentuada movilidad que, hasta bien entrado nuestro siglo, presentó en el país la titularidad de la posesión de la tierra [18].

Debilitada en su base económica y demorada en el proceso de incorporación al liderazgo que la estructura social no parecía

(16) Mucho más efectiva de lo que se había creído desde, posiblemente, la opinión tan reiterada de Larrañaga y Guerra, siendo en esto plenamente persuasivas las obras de Rodríguez, Sala, etc. mencionadas en nota 7.

(17) Uso aquí el término en el sentido de Weber como "forma de dominación patrimonial ejercida al margen de la tradición" e involucrando la constitución de un séquito político y militar reclutado por alicientes de tipo "prebendario", según también la terminología de Weber ("The Theory of Social and Economic Organization", A Free Press, 1964, p. 347. En la versión castellana de "Economía y Sociedad", México, 1944, t. I, págs. 241-242). Extremadamente interesante es el uso que hace de la categoría "sultanista", Juan J. Linz en "Notes towards a Typology of Authoritarian Regimes", Yale University, 1972, American Political Science Association.

(18) Sobre esta cuestión abundan los testimonios y la serie Rodríguez-Sala hace copiosa referencia a ella aun tendiendo a quitarle entidad y autenticidad al fenómeno. Fuente secundaria aunque interesante es la página que Julio Herrera y Obes dedicó a la muerte de Da. Isidora Sostoa y Achucarro en "El Heraldo", del 9 de abril de 1895 (en Luis E. Azarola Gil: "Veinte linajes del siglo XVIII", Paris, s.a., págs. 89-90). En los informes de Hood se estampa que "la Revolución llevó a las grandes familias a la mendicidad" y que "los ricos eran gente de bajo origen que se hicieron ricas después de la invasión inglesa de 1806" informe de Hood a Canning, de 31 de enero de 1825, en "British Consular Reports", London, págs. 75-76.

estar lejos de reclamarle, la capacidad de dirección de la élite urbana hubiera sido, a pesar de todo, más elevada si la específica condición de su asentamiento no la hubiera dividido —hasta desgarrado, cabría enfatizar— entre una real pluralidad de proyectos concebibles. Pues fue, ni más ni menos, la particular localización de la zona y de Montevideo, la naturaleza de sus intereses las que empujaron a considerar como posibles —cada una con sus costos y con sus gratificaciones anejas— las eventualidades de la reintegración a una unidad imperial española remozada y liberalizada, la de una incorporación a las Provincias Unidas, la de un manejo autónomo de la región, la de una liga común con el federalismo litoral y central argentino o la de pasar a condición de privilegiada provincia sureña del gran conjunto brasileño.

Es de suponer que sin esta debilidad de un sector social no todo lo dominante que la historiografía radical suele pensarlo pero mucho más "dominante", sin duda, que "dirigente", sería inexplicable el carácter "vertical" de la estructura caudillesca y del compromiso social en ella implícito. También lo sería su resultado, esto es, la rotunda diferencia que esa verticalidad ostenta con la forma que el compromiso caudillesco adoptó en la Argentina y, sobre todo, en Buenos Aires [19].

Esto no es demasiado fácil de explanar pero creo que puede comenzarse por calificar de "horizontal" el compromiso, el delicado equilibrio político que fue afinando Rosas a partir de 1829. Esta horizontalidad —cabe afirmarlo— es el caracterizante más idóneo de la función de puente —"pontifical"— del líder cuando ésta se cumplía (y efectivamente se cumplió) entre dos ámbitos sociales y espaciales perfectamente diferenciados y cuando uno de ellos, especialmente el rural se habría de hallar (y se halló) previa y fuertemente encuadrado y disciplinado. Los famosos "Colorados del Monte" hicieron visible ante la burguesía porteña, que recordaba con pavor el año 20, tan promisoria novedad.

Puede suponerse, por el contrario, que en el recién oficializado Uruguay los primeros caudillos político-militares: Rivera, Lavalleja, Oribe, también jugaron este papel que llamo "pontifical",

(19) Me refiero, claro está, a las "estructuras dominantes" en uno y otro caso, no a una distinción tan tajante como la misma antítesis verbal pudiera sugerirlo.

esa función de enlace entre un Estado-Ciudad de limitados alcances y un país aledaño escasamente poblado pero imposible de controlar social y políticamente por parte de aquél.

Que esta especie de enlace por "agregación de intereses", digámoslo así empleando el término de la sociología funcionalista, sea calificable de "vertical" puede justificarse en tanto y cuanto un sector dirigente más débil que el porteño tuvo que incorporarse dividido y en condición de séquito a una estructura de múltiples niveles —militares, secretarios, doctores, paisanaje, marginados sociales, etc.— con cuyos comportamientos, demandas e intereses el alto nivel social tenía que pugnar, y con los que había de prorratear su influencia, normalmente muy considerable, sobre la línea política y social, a veces muy errática, del caudillo. Ilumina sobre la peculiar naturaleza de la función caudillesca a este lado del Plata la misma disposición bipolar de la presencia de los líderes, especialmente si se la contrasta con la moral condición porteña y de otras provincias de un caudillo hegemónico.

La especial posición que en la estructura caudillesca tuvo que colocarse la clase superior económico-social urbano-rural no sería justificable, en suma, sin esa comparativa debilidad que adolecía. Por otra parte, parcialmente burguesa, parcialmente sólo mercantil, parcialmente señorial sino feudal, en el orden de las motivaciones y los valores también aquella clase presentaba por entonces una heterogeneidad que tampoco era, de seguro, un factor de fortaleza.

Pero la clave explicativa del precedente fenómeno es a su vez clave de otros entrelazados a él. No es casual, por ejemplo, que el compromiso caudillesco, que abre la larga serie de los compromisos uruguayos se contrajera casi inmediatamente a la evidencia del no-funcionamiento, de la pura nominalidad que exhibió la inequívoca afirmación clasista contenida en la carta constitucional de 1830 [20]. La desmovilización, por ejemplo, de la masa rural a través de la prohibición del voto mediante diversas causas de inhabilitación, la marginación política del estamento militar,

(20) Para un examen sumario de la Constitución de 1830 desde este punto de vista el pasaje correspondiente de "El Patriciado Uruguayo", Montevideo, 1961, págs. 77-81.

mostraron su mera entidad de manifestación de aspiraciones e impusieron un apresurado arbitrar de soluciones.

Pero también el compromiso caudillesco-patricio y su escala descendente de peldaños sociales se cargaría con ambiciones personales mutuamente excluyentes, con intereses antagonísticos intra y extrasectoriales, con diferentes reflejos ideológicos de tipo tradicional o modernizador, con el impacto de la intervención política y militar de las potencias mercantiles europeas y con las contingentes y variadas afinidades que se mantenían con los núcleos de atracción y poder más o menos cercanos (Río Grande, Río de Janeiro, Buenos Aires, la Mesopotamia argentina). Con toda esta alta carga de divisores el compromiso caudillos-patriciado se convertiría entonces en los dos duraderos partidos Blanco y Colorado. O, lo que es lo mismo pero a nivel más abstracto, en dos fuertes centros de socialización política, al mismo tiempo emocionalmente compulsivos e ideológicamente flexibles, en dos "subsociedades" que dividirán por décadas y aun por un largo siglo (junto con otros) al nivel social superior.

Verdad sin matices es casi siempre falsedad y aquí corresponde decir que la división partidaria, como se ha observado muchas veces, fue una división relativa, un corte que no excluyó múltiples tentativas de entendimiento (en 1836, en torno a Oribe; en 1846, sobre las mismas líneas de fuego, a menudo perezosas, de la Defensa y el Sitio; en 1855, contra los caudillos y la anarquía; en 1872, por partidos políticos modernos; en 1877, por Latorre o en contra suyo; en 1886, para cerrar el período militarista; en 1898, de nuevo en torno a un presidente, Cuestas, etc.) y alcanzó logros en tal sentido. Aun sin ellos fue relativa asimismo en un segundo sentido, puesto que no excluía un entendimiento tan difuso y genérico como firme sobre la estructura social que subyacía a toda la enconada competencia que a nivel político se libraba. De cualquier manera, y por amortizable que la división fuera, siempre pareció capaz de frustrar la conformación de una unidad de comportamiento de grado comparable a la de la clase dirigente porteña anterior y posterior a Rosas. A este propósito puede observarse que entre 1835 y 1852 la oposición a él radicada en el Uruguay tuvo que modularse sobre el tipo que llamo "vertical" de la integración caudillesca oriental. Que este plano de intersección de las dos

modalidades, transplatina y cisplatina, no dejó de involucrar grandes tensiones lo probaron, entre otros fenómenos, los reiterados choques que la emigración unitaria sostuvo con Rivera y que tanto dieron que escribir, en sus entonces "diarios", al general Tomás de Iriarte.

Ya se hizo referencia, como podrá recordarse, al antagonismo Montevideo-Buenos Aires. Fue la pieza inicial, la cabeza de un proceso que llevaría desde ella a la erección de un nuevo Estado por convención internacional que presionó sin contemplaciones ni demasiadas maneras la "interve-mediación" británica y consintieron, no sin largas reticencias los gobiernos de Buenos Aires y Río y aun no sin algunas el general en jefe oriental. Se ha hablado igualmente de la multiplicidad de polos de atracción que a la clase dirigente del país reclamaron. Y esa multiplicidad ya es buena pista de inferencia para la verificación de un fenómeno que el análisis de cualquier monto de material empírico confirma y que es la existencia por varias décadas de una colectividad con una base espacial, material y humana demasiado precaria como para alcanzar un margen mínimo, razonable, de autonomía de acción. Pero esto no debe entenderse en el sentido de ningún grandioso proyecto que no hubiera "cabido" materialmente en el pequeño ámbito uruguayo (desde Artigas, y dejemos de lado la presumible inviabilidad de aquél con el que se identificó, no hubo ni barruntos de ninguno). Se trataba simplemente del hecho de un espacio geográfico que mantenía tan fuerte continuidad ecológica, cultural y social con sus vecinos riograndenses y litoraleños que no había —ni habría hasta 1880— fuerza centrípeta, integradora, alcances de una autoridad central que pudiera cancelarla.

Es a través de esta carencia que marca su acción casi ininterrumpida en la historia uruguaya la gravosa variable "dimensión de la base material" de su sociedad nacional y que, acicateando, cohonestando, como se decía, la pluralidad de proyectos hacia los polos de atracción será uno de los factores más firmes de la recurrente modalidad oriental de la "guerra civil". La guerra civil, que dará aureola "púrpurea" al país pero amortiguará asimismo la perfección de su ajuste al modelo del "crecimiento hacia afuera".

4. Distorsiones en el esquema neo-colonial

Según las periodizaciones más prestigiosas, la segunda parte —y en ella sobre todo el tercer tercio— del siglo pasado representó en Latinoamérica la etapa del "crecimiento" o "desarrollo hacia afuera" o "modernización" en función del llamado "esquema neo-colonial".

Aunque en sus pormenores no sea posible detenerse ahora, dígase que el "modelo" representó sustancialmente el desenvolvimiento de "sectores de punta" de modernización tecnológica y productiva para conformar economías nacionales complementarias de una economía central (en casi todos los casos la británica) en su doble función de exportadoras de materias primas e importadoras de productos terminados. Supuso la gerencia y dirección de cada país por parte de una élite, de una oligarquía sustancialmente unificada, capaz de usar alternativamente los arbitrios políticos de la dictadura o los de una democracia liberal a base de una participación limitada y aun puramente nominal. Se caracterizó cultural e ideológicamente por su docilidad en la adopción de las modas intelectuales europeas o norteamericanas lo que habría supuesto de modo correlativo una impermeabilidad a los valores, inducciones y significados del medio circundante que más tarde se calificaría de "enajenación", o "alienación", o "extrañamiento". El trazo social del proyecto oligárquico habría involucrado a su vez, hacia uno de sus lados la congelación política y social de las demandas de una incipiente aunque creciente "clase media" mientras hacia el otro implicó la relegación y aun, en ocasiones, la destrucción física de los sectores pre-modernos de la clase baja rural, tarea despiadada que, incluso, debió cumplirse con buena conciencia. Para ello, se supone, pudo ser suficiente invocar tanto su pregonada ineptitud para cumplir el rol productivo subordinado que a esos sectores el proyecto le asignaba como la posibilidad de insurgencia, de disrupción siempre amenazante y latente que condensaba el nombre y la imagen de "la montonera".

Preguntémosnos ahora ¿qué efectivización, qué implementación tuvo en el Uruguay el pregonado "modelo"?

La consideración no es fácil ni puede ser demasiado breve.

Al margen de los conformistas tradicionales, algún histo-

riador ha discutido si real y auténticamente, el lema de "no hay vencidos ni vencedores" con que se selló el 8 de octubre de 1851 en el Uruguay la Guerra Grande representó un empate bélico-político entre la Defensa y el Sitio y entre blancos y colorados [21]. Hecho seguro es que el primer presidente de la República elegido tras aquella fecha perteneciera al partido que más desarticulado quedaba pero tal vez la cuestión no sea de esas que pueda fallarse verificablemente: es decir, establecer qué hubiera representado hacia aquella altura del proceso ser vencido o vencedor, qué equivalencia tendría a poco andar, cuál más tarde, etc. Sólo un cotejo con la situación paralela en la zona argentina permite alguna conclusión y ello no únicamente sobre la salida inmediata que implicó el acuerdo de paz sino sobre todo lo que pudo falsearlo y alterar la posición respectiva de ambos bandos.

La batalla de Monte Caseros (2 de febrero de 1852) cerró con una contundente derrota militar el período rosista y todo lo que le siguió: fuga del dictador, ejecuciones sumarias, sanciones económicas, condenación histórico-política prácticamente aplastante sobre su gestión y sobre su bando mantenida por décadas; todos estos arbitrios poseen un significado que no es atenuable por todos los pases de partido que hayan sido posibles, por todas las amortiguaciones que en la crema social porteña se hayan encontrado para los perdidosos o por la índole federal y provinciana de buena parte de las fuerzas militares vencedoras. En ese momento, el contraste con el Uruguay fue, de cualquier modo, tajante, y si esa nitidez se hizo borrosa poco más adelante se debió justamente al peso que la élite política porteña tendría en nuestro país entre 1853 y el fin de la guerra del Paraguay (la intentona de César Díaz, en 1858, fue más que nada un capítulo de ella). Si a todo esto se agrega el poderoso influjo que entre nosotros ejerció el Brasil por esos mismos años se ve, sí, que el "ni vencidos ni vencedores" del 8 de octubre de 1851 sólo hubiera podido autenticarse en un ámbito cerrado y que estando el uruguayo tan lejos de estarlo, el lema sólo tuvo la efectivación muy precaria que podía tener.

Aun en estas condiciones, puede aventurarse que de cualquier modo poseería un alcance difícil de exagerar la supervivencia plena de una parcialidad política como la "blanca", con "status" de partido alternante o gobernante y ello, en especial, por poco que se repare en lo que ella canalizaba y expresaba. Un sector social de predominio rural —ecológicamente hablando—, un grupo humano culturalmente "tradicional", un conjunto, en suma, capaz de involucrar todo lo que implica el término a la vez abstracto e identificador de "Premodernidad" no tuvo equivalentes entre las fuerzas sociales que integrarían en la Argentina la constelación de poder posterior a Pavón. Y si bien parte de este contenido resultó rechazado y, sobre todo, reprimido por la remodelación modernizante de 1872 y la transformación de la vieja fuerza en Partido Nacional que llevó a cabo el doctorado liberal, las consecuencias de una considerable continuidad se harían sentir en variedad de campos.

(21) V. Luis Bonavita: "Oribe perdió la Guerra Grande", en "Suplemento de El Día", Nº 1530, mayo 13 de 1962, p. 2.

Una de las más importantes, es de pensar, es la de que el Uruguay quedara bastante más resguardado que las zonas vecinas de esa compulsiva marginalización de los sectores agrarios más arcaicos que para algunas generalizaciones —caso de la de F.H. Cardoso— fue, como ya se recordaba, uno de los trazos esenciales del "desarrollo hacia afuera". Maticemos, con todo, que si esa marginalización se dió, como efectivamente ocurriera, estuvo de algún modo amortiguada hasta 1865 por la cobertura partidaria y que, aun después de esa fecha, fue un proceso harto más gradual que el que se registró, por ejemplo, a partir de 1862 en las provincias argentinas. Tan gradual, que es probable incluso, que al terminar el estadio típico del "desarrollo hacia afuera", probablemente estaba lejos de haberse consumado. En breve: si la reacción rural por los términos de la paz de 1872, si las consecuencias sociales del alambramiento en el último cuarto de siglo [22] son mani-

(22) Sobre este punto, el estudio de Raúl Jacob: "Consecuencias sociales del alambramiento: 1872-1880", Montevideo, Ediciones de la Banda Oriental, 1969, "Historia Rural del Uruguay Moderno, 1851-1885", de José Pedro Barrán y Benjamín Nahum, Montevideo, Ediciones de la Banda Oriental, 1967, t. I, págs. 557-584; Aníbal Barrios Pintos: "De las vaquerías al alambrado", Montevideo, Ediciones del Nuevo Mundo, 1967, págs. 239-254, mi ya citado artículo "Varias hipótesis..." y con alcance general "Los tres gauchos orientales" de Antonio D. Lussich, 1872.

festaciones o protestas por este proceso ellas no destruyen, empero, su índole gradualista, transicional, "a la británica" se diría (y por más de un motivo) que fue la nota dominante. Además, si tal fue el ritmo temporal, espacialmente no hubo en el país, tal vez por su dimensión, las zonas de arcaísmo técnico y social que lucieron en el conjunto argentino. (Aunque la estancia abrasilerada de los departamentos del norte no haya sido, de seguro, un modelo de "modernidad").

Volvamos al precedente punto de partida y adviértase que si a esa salida de 1851 se une la ya registrada existencia de partidos políticos con alta capacidad integradora de comportamientos y con esa estructura que comportaba pluralidad de niveles y esa composición plurisectorial o pluriclasista, las razones de la ausencia de una real unidad de la clase superior se hacen aún más comprensibles. No digo esto para abundar en lo ya abundado sino para subrayar su efecto sobre la capacidad (o la incapacidad) de asumir otra función, también "pontifical", pero distinta de la ya referida de ese tipo y que fue pieza infaltable en todo modelo de "desarrollo hacia afuera". Es la de ligazón entre el poder externo y el sistema nacional y los provechos conexos que el cumplimiento de esa función implicaba. Sobre ella se ha de volver pero quede aquí esta primera constancia.

En realidad, todo el medio siglo largo que corre entre 1851 y la primera elección presidencial de Batlle en 1903 mantuvo la vigencia de esos factores divisorios que ya se inventariaron durante los períodos de "independencia y anarquía" y "dictaduras" (Germani "dixit") aquí no siempre lo "unificadoras" (con excepción de la de Latorre) que en otras naciones solieron ser. Si la heterogeneidad intrapartidaria es un factor y un bipartidismo estabilizado otro, ambos conllevaron una participación bastante activa de la población. Esta procedió muy poco a través de unas estructuras partidarias tan precarias que bordeaban la inexistencia y aun lo hizo menos por la vía de unas instancias electorales en las que casi nunca era sensato esperar un mínimo de juego limpio. Si hubo un medio regular de participación política multitudinaria fue el que asumió la forma de movilizaciones armadas para la guerra civil y contó con las grandes reservas de apoyo y lealtad partidaria a la que éstas, como fue el caso conspícuo (aunque no habitual) de la

revolución del 70 o de "las lanzas", pudieron recurrir.

Pero hay que hacer jugar otros factores concausales si a lo que se apunta realmente es a explicar la falta de idoneidad de la clase superior para desempeñar esa función "consular" o "gerencial" que le fijaba el modelo de desarrollo hacia afuera. Ambos se sitúan en los niveles político e ideológico y ambos robustecieron su impacto por la importancia misma que esos niveles —político e ideológico— poseen de por sí en la determinación de un fenómeno como aquel a que se está haciendo referencia.

Del primero, algo apodícticamente, puede decirse que si esa era la función que el "modelo" exigía a la clase dominante y a medias dirigente y que si las ideologías cumplen, entre las suyas, la función justificativa de un estado y un proyecto social, ello no significa que opere ningún mecanismo autorregulador, ninguna "astucia" impersonal de la razón para lograr que esta función sea bien cumplida. Que una clase o un sector social puedan no acertar con el matiz ideológico más eficiente es accidente que no ha dejado de ocurrir y es de creer que fue lo que sucedió entonces con el llamado "principismo".

No es fácil caracterizar esta especie de fanático puritanismo demo-liberal que acometió a la juventud universitaria de la clase alta (de alguna manera los que Poulantzas llamaría los "funcionarios de la ideología") alrededor de 1870. Presenta algunas afinidades con otro fenómeno tan típico, tan impar como lo fue el del "krausismo" español pero aun tras los solventes estudios de Ardao y de Oddone [23] no se halla seguramente agotada la indagación de este grupo de los que alguna vez llamamos los "trotskystas del liberalismo" y cuyo programa político consistía en nada más (y en nada menos) que en el más puntual cumplimiento de todas y cada

(23) Sobre este tema, M. Blanca Paris de Oddone: "La Universidad de Montevideo en la formación de nuestra conciencia liberal", Montevideo, Universidad de la República, 1958; Juan Antonio Oddone y M. Blanca Paris de Oddone: "Historia de la Universidad de Montevideo. La Universidad vieja: 1849-1885", Montevideo, Universidad de la República, 1963; Juan Antonio Oddone: "El principismo del setenta", Montevideo, Instituto de Investigaciones Históricas, 1956; Arturo Ardao: "Espiritualismo y positivismo en el Uruguay", México, Fondo de Cultura Económica, 1950 y "Racionalismo y liberalismo en el Uruguay", Montevideo, Universidad de la República, 1962.

una de las disposiciones de nuestra primera carta constitucional. Si se piensa que ello involucraba no sólo el pleno funcionamiento de instituciones que cuando accedieron a la letra del texto legal mayor estaban respaldadas únicamente por una nebulosísima previsión de su posible efectividad, si se atiende a que la constitución nacional comportaba, como todas las de su especie, un capítulo de derechos y garantías individuales que aún los más regulares gobernantes solieron tomar, bonachonamente, como una saludable expresión de deseos, se puede calcular cuál sería la postura que esta "intelligenzia" de la clase alta y media-superior adoptó ante gobiernos que por lo general sólo trataban rutinariamente de salir del paso.

Algún otro matiz necesita esta mención para completar el perfil sustancialmente "utopista" o "extrañado" de esta generación y tal vez sea el de mayores consecuencias haber recogido la intransigente animosidad que, desde Tocqueville, el liberalismo europeo profesaba a todo fenómeno de autoridad y centralización políticas, a toda función ampliada del Estado. Pero esta postura los principistas la adoptaban no frente a una administración de la consistencia y densidad de la prusiana o la francesa postnapoleónica sino contra la de un país en el que por aquellos años Estado y autoridad se acercaron por entonces a la más absoluta nominalidad.

Expuesto todo lo anterior, tal vez conviniera rebajar la fuerza del calificativo que representa su obvia disfuncionalidad a todo el proceso de conformación social que estaba —quieras que no— en curso, puesto que el principismo fue, más que otra cosa, una especie de sarampión juvenil y casi todos los principistas de cierta hora —algunos precozmente, como José Pedro Varela, otros con el correr de los años y los golpes, como Carlos María Ramírez o Julio Herrera y Obes— fueron capaces de llegar a una percepción más penetrante y sedimentada de la realidad. Pero —y es lo que importa ahora— si se piensa que el movimiento cobró pleno impulso en los años setenta, puede admitirse que sus secuelas resultaron sumamente importantes en la producción de cierto ostensible "vacío de poder" que se dió en el país tras 1872 y —a través de él— en el del interregno de gobiernos militares que cubrió la

década 1875-1885 [24].

Otro factor —el segundo de los referidos— de naturaleza política, obró significativamente en la misma dirección, es decir, en la de una desconcentración y debilitamiento del poder del tope social. Este factor, al que ya se hizo referencia, fue el de la frontal y compulsiva marginalización a la que el grueso del Partido Nacional estuvo sometido para una efectiva competencia por el poder político. Desde 1865 hasta bien entrado nuestro siglo una especie de gran principio supraconstitucional no escrito aunque aceptado por todos (incluso, con la fuerza de un "fiat", por los dañados por él) presidió la contienda política nacional. Uno de los dos partidos ya tradicionales, el Blanco o Nacional, que expresaba a medio país e incluso a algo más, si se atiende a testimonios extranjeros imparciales, tenía derecho a representación en los cuerpos legislativos y en la administración departamental —siempre que ellos no pasaran de cierta línea— pero no a la puja por la función decisiva de la Presidencia de la República. Se implantó por casi medio siglo una estructura de las llamadas de "partido dominante" —a la mexicana— provista de todos los medios necesarios para mantener su calidad de tal y el fenómeno sólo fue atenuado en ciertos períodos —implantación del poder de Latorre, salida de las dictaduras militares— en que se acogieron a nivel parlamentario y ministerial nucleos "participacionistas" o colaboracionistas del partido desplazado. De tal modo, el partido que

(24) Sin borrar nada de lo escrito en los últimos tiempos me inclino a pensar que con el anatema de los "doctores", de los "oligarcas universitarios" que enfatiza el revisionismo de izquierda en el Uruguay ocurre un fenómeno muy singular de la historiografía política conservadora que los atacó y ataca aún de manera perfectamente coherente con su sistema de valores y posición general (conformismo, respeto a lo existente, gradualismo, antirracionalismo, etc.) como los "intelectuales" que eran (y no había otros que jugaran el papel). Eran miembros, claro está, de la clase social superior en una sociedad de estructura relativamente simple en la que ese estrato más alto desempeñaba prácticamente todas las funciones calificantes y la intelectual entre ellas. Es bastante divertido que la historiografía revisionista de izquierda le niegue el pan y la sal a quienes trataron de humanizar y civilizar las instituciones y las costumbres políticas y sociales del país (algunos de ellos también democratizarlas y nacionalizarlas) mientras encomian el carácter "popular" (como si esto tuviera algo que ver con metas democráticas o igualitarias) de cuanto bruto con mando (formal o informal) rondaba por la República.

albergaba en sí el sector más tradicional y económicamente más fuerte del país quedó reducido a la semi-impotencia política y sin otra salida que levantamientos armados cada vez más resistidos y costosos. (Debe leerse la reveladora página en que el ministro francés, conde de Saint-Foix, evocó a ese grupo social que rumiaba en sus tertulias de la Ciudad Vieja, en el desahogo de sus estancias su prolongado encono y sus sueños de revancha [25]). Pero aun lo que cabe llamar marginación tiene menos importancia en sí misma que la forma ideológica en que se articuló la aspiración por recuperar en el gobierno del país el sitio que le daban su historia y su ostensible masa de apoyo. La rigurosa alegación liberal democrática, la prédica del sufragio libre, de la representación política veraz, de los derechos individuales incólumes, de una honestidad administrativa intachable, de la participación popular contra todas las "oligarquías" (como se llamó a las camarillas que rodeaban a Herrera y Obes y a Idiarte Borda) no fue, de seguro, esa retórica esporádica, generalmente cuatrienal, que hubiera podido ser. Esas convicciones, por el contrario, dinamizaron la prosa tremebunda de los resistentes a Latorre y a Santos, la acción de "El Nacional" de Acevedo Díaz, desde 1895, la de los primeros clubes políticos blancos fundados en el campo y la ciudad a partir de esa misma fecha, la de la juventud de Luis Alberto de Herrera y de otros posteriores y más cautos doctores.

Si subrayo ahora con cierta detención la importancia del fenómeno es porque resulta posible aseverar que aquella entonación ideológica no sólo contribuyó —y poderosamente— a legitimar la ola de popularización posterior a 1900 sino porque también coincidió con las reivindicaciones de esa clase media que en la Argentina debieron articularse por esos mismos años en un partido nuevo —el Radical— que recién accedería al poder —o mejor dicho al gobierno— en 1916. Si las fuerzas sociales ascendentes tuvieron que labrarse en la Argentina tales nuevos cauces puede admitirse que la recién apuntada orientación no resultó irrelevante a esa ágil aptitud general de nuestros partidos tradicionales para motivar comportamientos y, a través de ella, hacer más fácil,

(25) Comte de Saint-Foix: "La Republique Orientale de l'Uruguay", Paris, Le Cerf, 1892, págs. 205-206.

más fluida, la integración político-partidaria de los nuevos sectores inmigratorios. Cierto es que esta integración tenía en el país tan significativos antecedentes como los de la intensa politización de algunos sectores europeos (artesanos, agricultores o pequeños comerciantes, españoles, vascos, franceses y, sobre todo, italianos) en el Montevideo del Sitio, la Defensa y la Revolución Florista. Puede suponerse, sin embargo, que la línea dominante fue a cierta altura la ajenidad y aun la "voluntad de ajenidad" a las contingencias políticas nacionales, una ajenidad de las que darían muestras en los niveles elevados la cuidadosa marginación partidaria del "alto comercio" anglogermano y de la mayor parte de los grandes estancieros del centro y el litoral [26] o la cerrada resistencia de las colonias agrícolas a los embanderamientos forzados de la guerra civil [27].

El rápido proceso de nacionalización y la circunstancia poco antes aludida alteraron este cuadro inicial y aun el "alto comercio" se integró en buena parte a la vida política del país a través del Partido Constitucionalista que era, él sí, altamente "respetable" [28]. Si se busca una síntesis a estas corrientes y contracorrientes ella está, de fijo, en que esa socialización partidaria que fue el fenómeno normal en campo y ciudad hacia fines de siglo representó —se discute o no su índice de realización— un proceso cuya originalidad resalta grandemente si se la compara con el caso argentino. Pues del otro costado del Plata dominó, por el contrario, la exigencia de nuevas agrupaciones partidarias y esas mismas formaciones resultaron en buen grado reticentes a servir de medio de expresión a los contingentes sociales recién incorporados al país [29].

(26) Con excepciones, claro está, como las de Mundell, Mac Eachen, etc.

(27) V. el interesante estudio de Germán W. Rama sobre la actitud de los colonos de Colonia Suiza ante las presiones de Flores en "Boletín Histórico" del Estado Mayor del Ejército, Nos. 80-83, Montevideo, 1959, págs. 262-263 y en "La enseñanza y la historia", Montevideo, Arca, 1963, págs. 54-60. También una interesante novela de Omar Moreira: "Fuego rebelde", Montevideo, Ediciones de la Banda Oriental, 1969.

(28) Como que en él militaban hombres que daban a ese sector la confianza que le inspiraban Eduardo Acevedo, Martín C. Martínez, Juan Andrés Ramírez, etc.

(29) V. el estudio de Oscar Cornblit: "Inmigrantes europeos en la industria y

Todos estos procesos son traídos aquí a colación por su visible incidencia en la relativa endeblez de la base económica y social que el sistema de poder dispuso en una —a pesar de todo— "economía nacionalmente controlada" [30].

En lo que ahora sigue caben muchos matices y aún alguna negación posible pero parece bastante claro que un sector propietario tiene menos fuerza política si sus titulares están sometidos a una rápida corriente de reemplazo. Esto sucede, es de creer, aunque el poder global del sector o clase permanezca intocado o aún pudiera crecer pues, de cualquier manera, en capital de prestigio, en destrezas entrenadas, en contactos, en pautas de conducta admitidas, etc., el activo total de la influencia decrece sustancialmente. Ahora bien: aunque no sé exista ningún estudio sobre el ritmo de este reemplazo [31], cualquier sinopsis, cualquier yuxtaposición de panoramas de las unidades productivas en Argentina y Uruguay permite la inferencia de que entre 1880 y 1910 ocurrió en el sector estanciero de nuestro país una sustancial sustitución de titulares en tanto que, del otro lado del río impresiona la continuidad patronímica que es posible marcar desde los beneficiarios de la enfiteusis rivadaviana o de las regularizaciones de Rosas hasta los años de oro del primer Centenario y de la Sociedad Rural

la política argentinas", en "The Politics of Conformity in Latin America", Claudio Veliz edit. New York, Oxford University Press (hay traducción castellana: "El conformismo en América Latina", Editorial Universitaria, Santiago de Chile, 1970, págs. 242-269).

(30) Uso la expresión en el sentido en que lo hace Fernando Henrique Cardoso, es decir, una economía que no es de "enclave", en la que la propiedad de los medios básicos de producción está en manos nacionales o de gentes plenamente nacionalizadas.

(31) Para el tema, el conocido libro de José Luis de Imaz, "Los que mandan", Buenos Aires, Eudeba, 8ª edición, 1969, capts. V y VI, plantea el asunto desde la perspectiva de la Argentina de la década del 60, en el Uruguay pueden extraerse inferencias importantes de los libros de Rodríguez-Sala, etc. para el período que va desde la Colonia hasta 1830 y para la segunda parte del siglo pasado y principios del presente diversos álbumes u otros materiales nacionales o departamentales, del tipo de "Tierra de promisión" (1904), de Carlos M. Maeso, de "El libro del Centenario" (1925), de Publicidad Capurro y, particularmente de los excelentes álbumes de Aníbal Barrios Pintos, sobre todo los últimos por él publicados: "Rivera" (1963), "Durazno" (1965) y "Artigas" (1968). La obra mayor de Nahum y Barrán muestra un débil interés por la cuestión.

Argentina [32].

El impacto económico de las guerras civiles —el de la invasión florista entre 1863 y 1865, el de la del 70-72 fueron importantísimos— su secuela de destrucción de bienes muebles y semovientes resultaron, con bastante probabilidad, casi tan sustanciales como los de la Guerra Grande. Es de creer, igualmente, que tales efectos, y en especial el desmantelamiento del ganado y la imposibilidad de repoblar concurrieron a promover el fenómeno de rápido traslado de manos recién aludido, una consecuencia que, vale la pena marcarlo, no es contradictoria con la rápida recuperación global de la ganadería después de las guerras civiles y aun con esa función "descongestionadora" de la plétora animal que éstas tuvieron y que Nahum y Barrán han destacado [33].

También se ha apuntado el rol que el papel moneda ejerció en la Argentina y la larga tradición de su amplia aceptación, frente al intransigente "orismo" de políticos, comerciantes y clase media uruguaya. Los beneficios que en la margen occidental del Plata derivaron para un sector ganadero de deudores en papel y vendedores en oro fueron sustanciales, en especial si se piensa que aun con oscilaciones, la línea de larga duración fue la de la depreciación del billete frente al metal. Tal prima faltó por completo a la clase ganadera uruguaya sometida en sus expectativas de producción y comercialización a los más violentos ciclos de contracción y expansión. No es deducir entonces muy aventuradamente que tales condiciones trabaron un posible desarrollo desembarazado de la clase ganadera oriental y de ello podría muy bien valer como indicador las dos décadas de atraso en la construcción de plantas frigoríficas con que el Uruguay entró en la modernización (y en el desahogo estable de sus exportaciones) respecto a la Argentina.

La imposición de los puntos de vista del sector comerciante sobre los objetivamente convenientes al sector ganadero que marca la contradicción anterior conlleva una consecuencia de aún mayor entidad. Y ella es el fenómeno ostensible de una desorgani-

(32) Es convincente en este punto el libro de Jacinto Oddone: "La burguesía terrateniente argentina", Buenos Aires, 1936 (1ª edic.) y 1956 (Ediciones Libera).

(33) En "Historia Rural del Uruguay Moderno", t. I.

zación y aun un antagonismo permanente para el ejercicio del poder político y social entre las fracciones de la clase alta. No digo que haya sido "estridente" aunque sí, como dije, creo que se puede calificarlo de "ostensible". En todo caso bastante alejado de la unidad de una clase superior que supone el "modelo" antes esbozado.

Si, según dictamen bastante firme, se recuerda la gestión más bien incompetente y escandalosa de esa fracción bancaria y especulativa que desde 1865, y aliada al séquito político-militar de Venancio Flores asumió un poco sorpresivamente el liderazgo de la clase alta se explica bastante la irrupción militar en el "vacío de poder" suscitado hacia 1875. Se explana mejor, por cuanto es factor concausal, si se hace memoria de las características del "principismo", que dió su marca máxima hacia aquel momento. Aquí también la comparación con la Argentina es reveladora y no la aminora la diferente forma de acceso de los dos gobernantes: Roca, elección y Latorre, motín. Orden y paz, sobre todo para los negocios, unidad y autoridad contra el faccionalismo de "la montonera": idénticas o casi fueron en la práctica las metas de Latorre (1876-1879) y de Roca (1880-1886). Pero mientras éste fue, pese a las resistencias de sectores porteños, el gestor, el organizador y el brazo ejecutor de una oligarquía ampliada y unificada, el apoyo de la clase alta a Latorre, si bien inicialmente sustancial, tuvo un carácter muy diferente. Digamos: más dividido (hay que restar la mayoría del sector universitario), más reticente, más discontinuo y, sobre todo, más "externo": la clase alta no lo consideró nunca, al contrario de la Argentina a Roca, uno de los suyos. Y todo este rechazo se acentuó grandemente con Santos, el "carretero" o el "carretillero", aunque él tenga igualmente su explicación en el muy distinto rumbo del gobierno del país entre 1880 y 1886 y de las metas "sultanistas" perseguidas por éste [34].

Si ha de concluirse el recuento de las "restas" actuantes a una maximización de la factible unidad de un sector urbano-rural modernizante que fue en toda Latinoamérica el gestor autóctono del modelo de "desarrollo hacia afuera", como todo conocimiento, se decía, es de alguna manera comparativo, no es posible evitar el cotejo con dos casos tan concordantes y vecinos como los de Argentina y el Brasil.

(34) V. nota 17.

Cualquier cálculo de la asimetría que la relación misma de poder involucra descansa en una ecuación entre los "recursos" para hacerla efectiva y los "logros" de esa efectivación, unos logros que se convertirán a su vez (aunque ello implique "costos" de mantenimiento) en nuevos recursos. En pocos casos esta relación de poder es más complicada que cuando se la calcula en términos espaciales [35]. Pero, de cualquier manera, parece claro que las oligarquías político-sociales porteña, o paulista, o carioca, con un país de grandes dimensiones (aún parcialmente controlado) ante sí, se hallaban en mejor condición de afirmar su poder que una que sólo tuvo un tan menguado cuerpo geográfico sobre el cual sostenerse como lo fue la "élite" uruguaya.

5. Modernización y democratización en formato pequeño

A primera vista —y aun a exámenes posteriores— el Uruguay que fue modelado por la obra de Don José Batlle y Ordóñez y su partido entre 1903 y 1931 —y aun persistiría por dos decenios sin muchos retoques— asumió todos los contornos de una sociedad moderna y democrática. Más todavía: algunas de sus características parecieron muy próximas al que en Occidente se llamaría tres décadas más tarde un "Estado de Bienestar" —un Welfare State— como subtituló George Pendle (la primera edición de) su breve, excelente libro sobre el país.

Se dibujó entonces —un "entonces" que se fija más plenamente en el segundo y tercer decenios del siglo— una sociedad de tono igualitario, regida por un Estado distributista cuyas agencias regenteaba una previsora, benévola y siempre presente burocracia. La existencia de un vasto sector público: bancos, ferrocarriles, puertos, energía eléctrica, combustibles, al que se agregaron más tarde la actividad pesquera, el transporte urbano, la red

(35) Esta relación se hace muy visible a nivel militar: piénsese como se planteó la ecuación entre "recursos", "costos" y "logros" con la desmesurada extensión de las líneas del Ejército alemán en la U.R.S.S., durante la II Guerra Mundial.

ferroviaria completa, la navegación aérea comercial; un ambicioso sistema educativo, laico y gratuito a los tres niveles, obligatorio al primero; un considerable conjunto de leyes sobre las condiciones del trabajo y del salario y, correlativamente, una organización de retiros que se iría haciendo general; una política económica y fiscal de fomento industrial y agrícola y aun medidas —efectivamente tenues pero siempre replanteadas— que buscaban la transformación de la estructura ganadera son los principales rubros que componen una meta compleja pero bastante coherente de desarrollo económico y social.

Pero, enunciados tales trazos, todavía faltarían algunos elementos muy caracterizadores del "modelo". Son los que a distintos niveles representaron un ejército rigurosamente sujeto a la autoridad civil y la más profunda y completa acción de secularización que se cumpliera en América Latina antes de la Revolución Mexicana (y, aun en cotejo con ésta, y sin sus violencias, infinitamente más efectiva por incidir sobre una sociedad de tanto más débil textura religiosa). Tampoco puede soslayarse (esto con todas las reservas que la caracterización mediante las ideas merezca) la promoción y difusión de un muy peculiar compuesto ideológico. El batllismo, como sistema ideatorio, se vertebró sustancialmente en torno a un radicalismo a la francesa, con todos los matices laicos y socializantes de un férvido humanitarismo y aun de una expansiva, cósmica emotividad. Porque casi llegó a ser doctrina oficial una especie de "piedad" de cariz tolstoyano (filiación para ese entonces) efectivada en verdaderos empeños por enjugar el dolor de los hombres y aun abreviar drásticamente el de todos los seres vivos [36]. Agréguese todavía como matiz de lo anterior una abierta permisividad ante los impulsos humanos que sólo décadas más tarde se haría general en Occidente y que por entonces afectó aquí algunos institutos básicos del derecho privado y familiar.

Tal conformación ideológica presentó asimismo el muy coherente correlato de un confeso internacionalismo pacifista, por ello

(36) Vgr. la supresión de la pena de muerte, la motivación de las leyes de divorcio, la prohibición del "rat pick" y las corridas de toros, las disposiciones sobre filiación natural, etc. fueron movidas total o parcialmente por esta intención.

ajeno y aun hostil a cualquier afirmación nacionalista. Esa afirmación era una bandera que se dejaba buenamente en manos del partido rival, en una postura de renuncia que pareció no ver la contradicción entre ella misma y la obra nacionalista efectiva que en lo económico el régimen estaba cumpliendo y se proponía ampliar [37].

Tuvo también aspectos peculiares el sistema político que gradualmente se estructuró. Se apoyaba sobre "partidos de masa" —o por lo menos de participación muy extendida— obligados a una puja electoral en extremo frecuente en su afán de guardar o conquistar el control del aparato estatal. Mayor y aun muy acentuada originalidad poseerá este mismo aparato después de la reforma constitucional de 1917 y de ese auténtico espíritu de "exorcización del poder" que la presidió. Su designio de conjurar los excesos tradicionales de la autoridad presidencial mediante el arbitrio de dispersarla y repartirla se tradujo en el ejecutivo dual-Presidencia, Consejo Nacional de Administración, múltiples cuerpos legislativos y ejecutivos colegiados pero también y paralelamente, mediante una diversificación del área administrativa y un ensanchamiento del lote de sus agentes (por otra parte más "tradicionalista" en sus comportamientos y más numeroso de lo que el sistema hubiera necesitado).

Este es, punto más, punto menos, el famoso "modelo batllista", como suele llamársele con relativa injusticia a un proyecto que iría concitando variados apoyos y en el que muchos, sin aquella etiqueta, colaboraron.

De cualquier manera coincido con Milton Vanger en que ese proyecto fue mucho más la efectivación de un rumbo político personal que el resultado de un juego de factores determinantes y, en especial, de las aspiraciones de una "clase media" o de unos "sectores medios" demasiado heterogéneos, indecisos y socialmente subordinados como para representar algo más que un conjunto social que sólo con Batlle tuvo asignada una función en el sistema (así como después, muy probablemente, contribuyó a su irremon-

(37) Aunque ella no se motivara en "la nación", como entidad sino en razones de "bienestar social" y "reivindicación popular" contra las demasías de "las compañías", que resultaban ser extranjeras.

table deterioro). Si se recapitulan, sin embargo, las debilidades o atenuaciones que presentó en el país el "modelo oligárquico" o de "desarrollo hacia afuera" cabe la presunción de que sin esas debilidades e, inversamente, sin las potencialidades, las posibilidades que estas involucraban, la obra de Batlle, su "modelo" pudo ser distinta y su realización menos efectiva. Resulta correcto, por ello, defender la originalidad y la inventiva política de Batlle contra los determinismos simplistas de cualquier "infraestructuralismo"; pero esa defensa comporta también la obligación de subrayar la acción de todos los antecedentes y condicionantes que la posibilitaron. La que alguna vez llamamos la "interpretación titanesca" de la "obra de Batlle" y que representó, entre otras, una exaltada biografía de Justino Zavala Muniz, centraba su luz sobre el personaje para colocarlo, empero, en una especie de contrapunto con un Uruguay anterior a su acción que más parecía el Ecuador de Gabriel García Moreno que el país oriental de los años ochenta y noventa.

Volviendo ahora a los condicionantes que operaron en los decenios del propio Uruguay batllista hay que reiterar la ya casi monótona mención a la debilidad de la clase superior estanciera que no se jugó para nada como tal en la guerra civil de 1904 pero que en 1910, tiradas ya las cartas que Batlle jugaba y habría de jugar pudo respaldar el movimiento revolucionario que en ese año desencadenó la perspectiva de su reelección. No hay datos precisos de hasta qué punto llegó aquel respaldo pero el rápido aplastamiento del conato revolucionario prueba una (por lo menos) de cualquiera de estas dos hipótesis. Esto es: que ni siquiera la perspectiva de una prolongada hegemonía política frontalmente adversa a sus intereses alcanzó a movilizar al sector estanciero o que el poder económico-social no es tan fácilmente traducible a términos político-militares como algunos simplismos suponen. (Especialmente si hay un gobierno y hay unas fuerzas armadas impermeables a sus sugestiones) [38].

(38) Batlle, observa Cohen, controlaba el área de comercialización principal del ganado pero un levantamiento civil exitoso podía haber sido concebido como bastante breve para que tal situación no causara daños irreparables y el ganado pronto pudiera ser retenido. Para reflexión sobre el hecho de que la clase estanciera no había ejercido la hegemonía política y social que cierto simplismo histórico le atribuye y sobre el levantamiento de 1910 como prueba de ello, mi estudio "Política, poder y partidos en el Uruguay de hoy", en "Uruguay hoy", Buenos Aires, Siglo XXI, 1971, págs. 288-291, nota 40.

Esta debilidad —relativa con todo— explica, es de suponer, que la política económica, fiscal y social del período batllista se moviera, como se movió, en el filo de amenazar a la propiedad estanciera pero no agredirla masivamente, de restarle recursos que facilitaran su modernización desde la estructura latifundista misma pero sólo a su vez emplear arbitrios impositivos inoperantes para lograrlo por su parte desde fuera de esa estructura [39]. De cualquier manera parece más seguro que fue esa debilidad la que permitió sustraerle recursos al sector agrario para engrosar con ellos la corriente de asignaciones que alimentaría los logros del "Welfare State".

Vale la pena observar igualmente la fuerte identificación de todos los niveles sociales con el sistema partidario, tal como éste emergió, prácticamente invariado en sus exterioridades del relativo desdibujamiento de los años del "militarismo". Esa identificación fue la que hizo factible inyectar en uno de los segmentos del sistema —el colorado— un contenido ideológico y un plan político-social que hubiera corrido sin duda un destino harto menos feliz de haber tenido que presentarse como tercera alternativa entre las dos tradicionales.

De la "variable exterior" digamos sólo que la condición uruguaya frente a la dependencia económica del extranjero, comportando entre sus elementos esa "economía nacionalmente controlada" que ya se mencionó y una cuantía nada despreciable pero no desmesurada de inversiones extranjeras le dió al proceso una fluidez y una ausencia de violencias mayores que sólo se hace patente si se le compara con el caso de otras naciones de Latinoamérica —México, a partir de 1914 es uno de ellos— en trances similares de reforma y nacionalización.

Podría agregarse aún que el fenómeno general registrado en

(39) V. el trabajo de Mercedes Quijano: "El Batllismo: su política fiscal y la burguesía agraria entre 1900 y 1930" en el Instituto de Ciencias Sociales de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de la República Oriental del Uruguay, "Cuadernos de Ciencias Sociales", Nº 2, págs. 31-53.

la etapa anterior, esto es, el de una cúspide social y económica incapaz de traducir su poder en instrumentos políticos estables y que se dispersa en una pluralidad de vías involucró un antecedente político muy importante. Me refiero al hecho recientemente subrayado por Nahum y Barrán de que los descendientes de un patriciado ya empobrecido —como fue el caso conspícuo de Bauzá, de Carlos María Ramírez— pudieran plantear, como lo hicieron, alternativas industrialistas, estatistas, nacionalistas y antilatifundistas o aun, los más jovenes, como fue el de Eduardo Acevedo, incorporarse al equipo dirigente de la nueva fuerza política que se estructuraba. Fueron dos conductas que, en proporción diferente, contribuyeron a fortalecer y prestigiar a esa corriente que pronto se llamaría "batllismo" y a las metas nacionales que perseguiría.

Podrá decirse —y lo acepto buenamente— que nada de esto significa atenuación o amortiguación estricta en la implantación del "modelo batllista" sino, más que otra cosa, reiteración de algunas debilidades del estado anterior de "desarrollo hacia afuera" que permitieron su superación e hicieron posible iniciar otro nuevo. Sin embargo, algunas de esas atenuaciones obraron también como constantes, como persistentes señas a lo largo de todos los "tiempos de Batlle", explicando en buena parte sustanciales endebleces de la obra y sobre todo su falta de aliento a largo plazo. Será entonces a esas endebleces, enfrentadas ya con la maximización, ya con las exigencias razonables del modelo a las que llamo "amortiguaciones" y aun "amortizaciones".

Dos de ellas, de índole económica y estructural, han sido identificadas hace tiempo y existe virtual consenso sobre su operancia entre todos los matices ideológicos de la crítica del período y aun entre los estudiosos extranjeros [40].

Parece seguro, en primer término, que para mantener su dinamismo el proyecto batllista hubiera exigido la plena modernización, no sólo técnica sino social de la estructura latifundista

(40) Es el caso de Henry Finch, que en su perspicaz ensayo "Three Perspectives on the Crisis in Uruguay" (en Journal of Latin American Studies - Cambridge University Press), vol. 3, pt. 2, november 1971, págs. 173-190) la toma muy en cuenta.

predominante en el sector agrario. O, lo que es lo mismo, unidades de producción de una magnitud más adecuada para la explotación intensiva, mayor diversificación productiva, mayor absorción de mano de obra y/o de maquinaria, más alto poder de radicación de gentes dentro de las mismas unidades, jerarquización más compleja y dilatada que la implicada en la sumaria cadena de patrón, capataces y peones. Como ya se decía poco antes, la política batllista no sólo alcanzó esta meta sino que muy esporádica y perfunctoriamente luchó contra la estructura dominante y los modos sociales y económicos en que se manifestaba. Más bien, se diría, trató de circuirla con zonas de modernización, con "sectores de punta" a los que se supuso capaces de vulnerarla mediante un dinamismo más o menos espontáneo. Fue una posibilidad que se visualizó a través del desarrollo agrícola pero también con la política de comunicaciones y transportes.

¿Impotencia, descuido, renuencia o más conscientemente "compromiso"? Sobre las motivaciones de la actitud batllista mucho se ha discutido y no existen muy probablemente pruebas fehacientes que permitan fallar en el debate. Pero sea una o sea otra la motivación por la que se opte obvio resulta que poseyeron considerable entidad las consecuencias aparejadas por el mantenimiento de la estructura social rural. Subsistía, en primer término, en toda su consistencia, un grupo social básicamente hostil al proyecto en vigencia y quedaba en sus manos la corriente de bienes que alimentaba la exportación del país. Pero también operarían a largo o mediano plazo otros efectos. El estrechamiento del mercado de consumo para la producción industrial era, como más de una vez se ha señalado, uno de ellos. Otro estaba representado por el impacto de la inevitable y sustancial emigración rural sobre el sector urbano menos favorecido que la permanencia del latifundio provocó [41] y, en especial, sobre el volumen y el ritmo de la corriente de demandas que ese sector urbano bajo —con consecuencias cada vez más graves— le iría planteando al sistema político. Debe señalarse que, para los índices de movilización y de

(41) V. Aldo Solari: "Sociología rural nacional", Montevideo, Facultad de Derecho, 1ª edic., págs. 507-537.

demandas sociales de los primeros decenios del siglo, todo esto pareció un principio de vitalidad democrática; tiempos llegarían, como ya pareció intuirlo en 1930 Martínez Lamas, que mostrarían un cariz mucho más aciago.

También ha sido señalada la debilidad del proceso industrial, la flojedad de un empeño que representaba la variable estratégica por excelencia en la viabilidad del modelo. Cierto es que esto no se veía entonces con la nitidez con que hoy se ve, pero, en verdad, un precoz "Estado de bienestar" de signo "radical" tenía que descansar sobre él. Siempre, por lo menos, que no se optara por lo que hubiera sido también un precoz "modelo neozelandés" de intensificación y diversificación agraria (y aun en este caso los corolarios sociales a extraer hubieran sido bastante diversos).

Con un mercado espacial y demográficamente reducido y más reducido aun por el bajo consumo rural, sin base aparente de recursos minerales para pasarse —aun en una etapa ulterior— a las industrias de "base", o "pesadas", o de "bienes de producción", un énfasis global y más bien nebuloso en las ventajas de la industrialización ocultó por entonces unas carencias que sólo bastante más tarde exhibirían su plena significación. Tal vez ello ocurrió cuando la Argentina y el Brasil levantaron vuelo hacia la posesión de un sistema industrial prácticamente completo y cuando en el país, inversamente, el que existía se recogió sobre sí mismo, en el estancamiento de una rutina de sustitución de importaciones ligeras incapaz de generar el paso a otro estadio de mayores alcances.

Si todo esto, en una u otra forma ha sido muy remarcado, creo, en cambio, haber estado solo en la tarea de señalar la intrínseca amortiguación y debilidad que el "modelo batllista" representaría desde el nivel estrictamente político.

Se ha hecho ya referencia (y más de una vez) al intenso y prolongado proceso de socialización política que sostenía la vigencia popular de los dos partidos tradicionales y no hizo poco por robustecerla aun más la misma insistencia de Batlle en la necesidad del "gobierno de partido" y en la organización de partidos con sólida base de masas y una estructura democrática de decisiones. Es importante destacar ahora que este proceso involucró no sólo al partido oficial y gobernante sino, asimismo, al opositor: las dos últimas guerras civiles (1897 y 1904) habían probado que el Partido Blanco o Nacional representaba una fuerza que si era vencible no era anulable puesto que disponía en la derrota de una excepcional capacidad de recuperación. Lo cierto es que por esta acción de involucración en cuyos detalles no es posible detenerse ahora, la corriente de organización y movilización partidarias también le daría al Partido Nacional un más nítido perfil y un empuje más sedimentado y más firme. En puridad, sería inconcebible que ello no hubiera ocurrido a poco que se piense en las resistencias que hubo de suscitar la aplicación del proyecto oficial y aun los propios desencantos que las fallas de su aplicación iban a provocar [42].

Comprensible es igualmente que la facilidad que existió para alojar un contenido programático novedoso, alógeno y hasta revulsivo bajo la etiqueta tradicional colorada había de pagarse con la obligación de convivir bajo esa envoltura con posturas sociales e ideológicas extremadamente distintas. Y como no era sólo "convivir" sino depender de su consentimiento, acceder a muchas de sus imposiciones, abonar costos variablemente altos para poder librar con éxito la batalla electoral, el factor político amortiguante se hace también aquí muy claro. El tedioso y menor ejercicio del compromiso, el minúsculo prorrateo de soluciones de que fue teatro el ejecutivo colegiado (y que la obra del sueco Göran Lindhal tan puntual y hasta aburridamente detalla) [43] es una manifestación característica de la varadura en que paró el dinamismo de un impulso tan soberana e inicialmente desembarazado.

Con todo, de esta práctica primera compulsiva y poco entrenada del compromiso saldría más tarde su maduración y estabili-

(42) El Partido Nacional reunió en las elecciones de 1922 116.080 sufragios en 246.322, esto es, el 47% del total y 7.199 menos que el Partido Colorado. En las de 1925 se distanció de su vencedor sólo por 3.400 votos, reuniendo el 42% de los sufragios de Montevideo y el 52% de los del interior del país. En 1926 alcanzó al 48% del total electoral.

(43) V. Goran Lindhal: "Uruguay's New Path", Stockholm, Institute of Latin-American Studies 1962 (traducción castellana con el título de "Batlle: fundador de la democracia en el Uruguay", Montevideo, Editorial Arca, 1971). V. también los volúmenes II y III de la excelente crónica (o historia política) del Uruguay actual de Carlos Manini Ríos "Una nave en la tormenta" (1972) y "La Cerrillada" (1973), ambos editados en Montevideo.

zación en un "sistema de compromiso" cabal, a doble plano político y social. Una sustantiva amortiguación —quiero decir— de las relaciones de dominio y explotación que caracterizan a toda sociedad de clases, modulada por la gran latitud de acción de su sistema político en el ejercicio de la función redistributiva y en numerosas mitigaciones y concesiones a los niveles medios. Ese compromiso fue asumido como tarea tácita pero central por un personal político bipartidario y de origen social bastante diversificado (clase alta, clase media tradicional, sectores medios más nuevos y aun considerable número de gentes promovidas por las carreras universitarias desde el linde entre el viejo artesanado y la nueva clase obrera). El exitoso ejercicio del arbitraje entre demandas de distinta proveniencia y una caudalosa inventiva legal y constitucional siempre presente cuando había de salirse del paso en los momentos difíciles [44] afinó las destrezas de este personal y concurrió, junto con otros determinantes más generales, al alto grado de legitimidad que sostuvo a todo el sistema.

Sobre esto último es inexcusable hacer tres precisiones.

La primera es que tal estilo de compromiso, que se afirmó plenamente en los años veinte, puede verse como la clausura —tanto a nivel político como a nivel social— de aquel primer período batllista (1904-1915) en que todo el país y su sociedad recibieron, sin verdaderas posibilidades de resistencia, el impacto de un "proyecto nacional", unitario y movilizador. Y es justamente poco después, durante la presidencia de Feliciano Viera (1915-1919) que se decreta el famoso "alto" por el que se reconocen, tácitamente, las reacciones insalvables que aquel proyecto comenzaba a suscitar.

La segunda se refiere al carácter de fuerte legitimidad de que se hablaba y a la que concurrieron a fortalecer un cierto tipo de cohonestación o motivación ideológicas crédula, auténticamente democráticas pero también razones de índole retributiva. Es decir, las de un apoyo, las de una estimación que sectores sociales enteros brindan pero sólo lo hacen en función de lo que han recibido o esperan recibir. La "democracia" fue así implicando crecientemente no sólo la ratificación eleccionaria y regular de los gobiernos y un margen considerable de verdad representativa en los cuerpos parlamentarios sino, además, la racionalización de aquel "compromiso" como un trámite social ideal, como un medio de hacer efectivo "el respeto a todos los intereses creados" [45], cualquiera fuese el plano en que se articulasen y cualquiera su funcionalidad al conjunto.

(44) Este aspecto exigiría un estudio independiente, pero aun sin él, puede ser rastreado en numerosas disposiciones de las constituciones de 1934, 1942, 1951 y 1966, en los variados pactos y acuerdos políticos concluidos en el país, etc.

La tercera precisión debe subrayar, siguiendo una reflexión de Solari [46], hasta qué punto, y en especial alrededor de 1930, esta legitimación del sistema se identificó con la legitimación de la nación misma. Se habrían consolidado de este modo estados de espíritu y normas de comportamiento, grados de cohesión comunitaria que durante el siglo XIX habían sufrido fuertes oscilaciones y a los que la ola nacionalista de la década del ochenta no llegó probablemente a estabilizar con la fuerza con que ha solido enfatizarse.

Dígase aun para cerrar este recuento sumarísimo de la secuencia batllista que del conjunto de sus tendencias emergió una sociedad urbana de mediana entidad numérica, de mediano ingreso, de mediano nivel de logros y —puesto que aun no estaba bombardeada por el "efecto de demostración" de origen externo— de medianas aspiraciones, aunque a la vez sobreabundante de las compensaciones simbólicas que idealizaron su "status", su país, el sistema. De ella saldrá el discutido pero inderogado "Uruguay conservador", compuesto por gentes que ya habían conseguido algo y aun bastante, en el que una buena porción de ese conjunto suponía que ello era ya suficiente y en el que, es muy posible, una minoría sustancial pensaba y piensa en que era (en que todavía es) viable el esfuerzo de cada cual para, sin cambiar casi nada alrededor, agrandar su parcela.

(45) Así se decía en 1948, como uno de los méritos que tenía para aspirar a la Presidencia de la República D. César Mayo Gutiérrez que éste nunca había lesionado "ningún interés creado" (de un manifiesto electoral publicado en "El Día", en el curso de ese año).

(46) V. "El desarrollo social del Uruguay en la postguerra", Montevideo, Editorial Alfa, 1967, págs. 142-143.

6. Una reacción débil, corta y conflictual

En el Brasil y en la Argentina la crisis mundial de 1929 y sus secuelas económicas internas desencadenaron procesos político-sociales drásticos y violentos. En Brasil, a través de un levantamiento cívico-militar, se cerró el período de la "Republica Velha" y el esquema agroexportador-importador que funcionara hasta entonces y cuyas bases sociales eran la oligarquía terrateniente, las "cliques" políticas estatales y el sector mercantil dió paso a un proceso de desarrollo nacional fundado en un nuevo impulso de la actividad industrial. Socialmente se articularía a poco andar en un equilibrio de sectores modernizantes altos, medios y bajos que al ser gubernativa y políticamente regulado se designó más adelante como "alianza varguista" o "populista".

Argentina sufrió el impacto de la crisis con consecuencias ostensibles diametralmente opuestas. Desde 1916, aunque con fuertes oscilaciones, el país había vivido en una inestable dualidad de niveles de poder. El económico-social había sido retenido sustancialmente por la clásica, tradicional "oligarquía" de base ganadera y financiera, en tanto que el político había pasado a manos de una coalición de núcleos tradicionales del interior y de sectores de proveniencia inmigratoria y aglutinados todos, en torno a lemas antioligárquicos, bajo las banderas del radicalismo.

Si ello era así, no hay virtualmente disentimientos en torno al hecho de que el golpe militar del 6 de setiembre de 1930 reunificó esas dos modalidades de poder en esa oligarquía conservadora que estaba vinculada de modo irrompible al mercado inglés y al tantas veces mencionado modelo de "desarrollo hacia afuera". Pero trece años más tarde, en 1943, la división ideológica del grupo dirigente civil y del sector militar en materia del rumbo internacional e institucional a seguir abrió la vía a una nueva etapa. El desenlace de los dos ásperos (y no superponibles) debates entre "neutralismo" (progermano) y "aliadofilia" y entre la permanencia del fraude como arbitrio electoral y un mínimo de sinceridad eleccionaria marcó el punto de partida de un proceso populista de nueve años (1946-1955) que realineó, por otra parte, el desarrollo político argentino con el que el Brasil seguía desde 1930 pero, es-

pecialmente, desde 1950 y la vuelta de Vargas, del "nuevo Vargas".

De nuevo aquí se hace fundamental una insistencia que si no es evitable es porque representa la vértebra de todo este planteo. Y es la de cuánto más débiles, más atenuados fueron en nuestro país los efectos de la gran remoción de 1929-1930, fecha límite latinoamericana para cerrar el período de los modos ortodoxos de "crecimiento umbilical" o "desarrollo hacia afuera".

Abreviando de cualquier manera esta tarea debe marcarse, primero, que la revocación de las formas políticas constitucionalmente vigentes se procesó en el Uruguay a través de un gobernante elegido en 1930 en procedimiento regular y que sólo a los dos años de ascender al poder, y esto tras muchas dudas y cabildeos, se atrevió a asumir poderes dictatoriales.

La dictadura invocó, sí, los clásicos argumentos del golpe de fuerza de tipo conservador: así el exceso burocrático, el ascenso pronunciado de los gastos públicos, el peso de la carga fiscal, el déficit de la balanza comercial, la crisis y aun la ruina de la producción agraria, básica para el país, etc. También es cierto que no faltaron en la tarea de justificación motivaciones y argumentos de tipo represivo: la actividad comunista, la frecuencia de las huelgas, la tolerancia con la delincuencia ideológica de sello anarquista, el peligro social implícito en todo ello e igualmente es verdad que estas alegaciones se hicieron efectivas en muchos casos de abierta persecusión a los sectores implicados (estudiantes, universitarios, dirigentes obreros, políticos de izquierda). Y aun no estaría trazado ni sumariamente el cuadro si se olvidaran frecuentes coqueteos con las entonces ascendentes potencias fascistas y que se concretaron en actitudes políticas internacionales, en el tratamiento excepcional a algunos de sus agentes diplomáticos, en múltiples vínculos económicos que por entonces se contrajeron con el capital alemán, etc. Y todavía, para terminar con lo más decisivo, hay que mencionar la dirección de privilegio que la corriente de decisiones y asignaciones que en el gobierno se originaba —precios, tarifas, tipos de cambio, tasas fiscales— tomó hacia los dos sectores tradicionales de la ganadería y del "alto comercio".

Todo esto, como es natural, posee un significado muy inc-

quívoco y aun identificador con el contemporáneo fenómeno argentino. Pero también en el Uruguay cobraron relevancia determinados aspectos que faltaron por completo en las correspondientes coyunturas de los países vecinos.

La sustitución del elenco gobernante —primero— operó dentro de un personal político sustancialmente unificado y que pertenecía a los dos partidos tradicionales, en uno de los cuales su sector mayoritario apoyó el golpe de Estado y en el segundo lo hizo el minoritario. La división de este personal unificado en torno a opciones sociales y constitucionales permitió este tipo de reemplazo.

En un país de fidelidades políticas entonces tan estables es casi seguro que este respaldo inicial, más que los discutibles éxitos del nuevo gobierno haya sido el que le aseguró un considerable sostén electoral. En los años mismos de la dictadura, y a causa de la abstención electoral de los partidos adversarios, éste fue naturalmente, abrumadoramente mayoritario, pero si se atienden las cifras de 1942, cuatro años después de cerrarse formalmente el período, se advierte hasta qué punto era sólido el soporte electoral de los grupos políticos ex-golpistas [47].

Así como sus maneras moderadas, comparativamente hablando, le ganaron a la dictadura el apodo de "dictablanda", también se calificó a la decisión que la implantó de "golpe policial". El matiz precisado —semilaudatorio, semidespectivo— señala no sólo que el evento ocurrió sin el apoyo explícito ni la intervención material de las fuerzas armadas (aunque sí con su neutralidad benevolente) sino algo de más alto valor indicador. Es la relativa baja tensión de todo el proceso, un trazo que tan

(47) En 1938, año de la candidatura "anticontinuista" de Baldomir y de su triunfo, en un total de 357.205 sufragios, los reunidos por las fracciones de Herrera y Blanco Acevedo, fuertemente solidarizadas con el golpe de Marzo alcanzaron a 212.504, esto es el 59% de los votos. En 1942 y 1946 hay que tener en cuenta que el grupo baldomirista, "Para servir al País" se había realineado en cierto modo hacia su origen y recuperado el signo de él. Teniendo esto en vista, se puede establecer que en 1942 de un total de 574.703 sufragios en la elección senaturial, más clara en ésto que la presidencial, los grupos ex-marzistas reunieron 278.546 votos, es decir, el 48% del total. Aun en 1946, ahora sobre las cifras de la elección presidencial, esos mismos grupos lograron 330.332 sufragios sobre un total de 694.405, esto es el 47% de ellos.

bien puede advertirse hoy por más que la proclividad dramática y trascendentalista de una sociedad, hasta el momento tan apacible, no lo advirtiera.

Todo lo anterior sería, empero, secundario, si fallara en la prueba un elemento de persistencia tanto más decisivo. Pero puede sostenerse que el "sistema de compromiso" —de "reconciliación" política y social, si es que aceptamos el término de Apter—, ese aparato configurado y puesto a punto en la década anterior no fue desmantelado por el golpe de 1933 ni sustituido por otro. Cuando más debe afirmarse, sí, que fue modificado en sus términos a favor de los sectores terratenientes. Pero esto no significó su caducidad sino la prueba —y la primera importante— de la gran elasticidad de que estaba —y de que estaría— dotado. Es una característica concurrente pero peligrosa de confundir con otra, y que es la representada por el hecho de que el reajuste fue cumplido por personal que ya participaba del poder y estaba hecho a la función de arbitraje (en vez de marginado en la instancia previa al golpe como en la Argentina ocurrió).

Por todo lo anterior no fue difícil encontrar una salida cuando las razones y el impulso del estado de excepción quedaron agotadas. Se encontró en la candidatura del general Baldomir, la que presentó la ventaja que aunque emanaba del mundo oficial no fue prohijada ni tampoco hostilizada por él, un delicado balance, digámoslo de paso, que cuando se quiere deliberado es casi imposible de lograr. Era, en suma, una relativa marginación, la que unida a ciertos y meros vestigios de disidencia en el postulante, a su buena presencia y a una amable opacidad castrense compusieron un cuadro bastante bueno para que el voto flotante y aun grandes sectores de la oposición lo respaldaran con brío.

Con todo, esta salida en "andante cantabile" no hubiera sido posible si un factor tradicional ya muy operante no hubiera pesado decisivamente. Este fue el de la reunificación ideológica de la gran mayoría del personal político y social dirigente en torno a la argumentación ideológica de las naciones que se oponían a la expansión impetuosa de la Alemania nazi y que serían, al año siguiente, las "naciones aliadas". Así, mientras en el Brasil Vargas jugó al neutralismo hasta 1941 y su "Estado Novo" fue, en grado sustancial, hijo del prestigio fascista y neoautoritario, en tanto

que en la Argentina aliadofilia y nacionalismo neutralista y progermano dividieron en profundidad grandísima a las clases alta y media, en el Uruguay, no es arriesgado afirmarlo, el coligante doctrinal demoliberal facilitó la soldadura de la quiebra producida años antes.

El período dictatorial, así, interrumpido desde 1938 y nítidamente revocado tras 1942, sólo legará tal vez a las variables de acción permanente en el cuadro uruguayo la legislación aprobada y completada a partir de 1934 para dar la máxima consistencia institucional posible a los partidos tradicionales y acorazarlos así contra toda movilidad del electorado que intentara tramitarse al margen de ellos [48]. Tuvo el efecto previsible de esta clase de arbitrios, es decir, tendió a esclarecer la estructura política haciéndola cada vez más sorda a iniciativas e irrupciones de nuevas fuerzas (lo que casi siempre, por otra parte, ocurre en un régimen "bipartidario estable" aun sin especial refuerzo legal). Pero es indudable igualmente que logró marcado éxito en atenuar el impacto desestabilizador que esas fuerzas pudieran significar en un sistema cuya estabilidad se convirtió, cada vez más, en la meta suprema.

7. Un "populismo" apenas identificable

El carácter especial de la transición autoritaria en el Uruguay hace mucho más difícil que en la Argentina y el Brasil acotar un "período populista". Pero también en esto tiene que ver el muy fluido, graduado pasaje que representaron los mandos presidenciales del general Baldomir y de Juan José Amézaga (1939-1947). Sin embargo, que esta etapa populista existió en alguna medida lo permiten advertir los principales trazos de la política estatal y partidaria entre 1948 y 1958 y sus ostensibles correspondencias con la aplicación del modelo que representaron el peronismo y el varguismo.

(48) Este aspecto se analiza en forma bastante completa en el ensayo del autor, "El impulso y su freno", Montevideo, Ediciones de la Banda Oriental, 1964, cap. VI, págs. 75-96.

Si se cree, para comenzar, en la fuerza de las determinaciones externas al sistema político apuntemos que en el Uruguay se dieron las mismas condiciones que en el resto de América subatlántica involucraron la existencia de grandes saldos disponibles para la inversión o la redistribución generados por las exportaciones de la guerra y el incentivado proceso de sustitución de importaciones, iniciado años antes pero que entonces aceleró su ritmo, la incipiente movilización de sectores sociales previamente pasivos y, ligados inextricablemente a ella, el considerable éxodo rural y la intensificación del proceso de crecimiento urbano.

También los años del predominio político de Luis Batlle Berres pemitirán apuntar los elementos comunes entre su acción y la experiencia populista argentina, una identidad que la distancia permite hoy percibir mejor de lo que era posible hacerlo en aquel tiempo en que las relaciones entre ambos gobiernos del Plata fueron desusadamente conflictuales y trabajosas.

Si aún conviene completar la afiliación de ambos regímenes platinos a un mismo sistema, debe apuntarse que fue igualmente la misma línea política de redistribución social la que operó, así como eran muy similares los instrumentos para cumplirla con que ambos aparatos estatales contaban. En verdad, desde la crisis de 1929 y un poco empíricamente, todo un lote de arbitrarios controles de cambios y de moneda, regulación del comercio exterior, fijaciones de precios remunerativos, marcación de precios mínimos, subsidios, estipulaciones de salarios y costos se habían ido ya sumando a los más tradicionales de carácter aduanero, presupuestario, impositivo y crediticio.

También fue común el prospecto seguido en esa redistribución, sobre la que podría decirse que, a plano "altruista" [49], implicaba un nuevo esquema de desarrollo interno basado en la industria y en un consumo expandido, mientras que a plano político autoafirmativo involucraba la suscitación de una estable

(49) O diría, con el distingo que permite el uso vulgar del inglés (pull-push — tirar-empujar), que el caso se plantea a nivel del "push", esto es, de la ampliación, o ensanche, o apertura y compatibilización de la esfera de intereses (fenómeno, por otra parte que caracteriza regularmente la relación del sistema político respecto al sistema social).

corriente de apoyo electoral desde los sectores más débiles que eran gratificados en algunas de sus no muy exigentes expectativas. Y agréguese todavía para completar el cuadro de ambas naciones del Plata, la formación de un séquito de intereses económicos privilegiados mediante los múltiples modos que el Estado disponía para hacerlo, pero entre los que se destacan una industria alta y muy "particularísticamente" protegida y una importación tan restringida como abiertamente discriminada [50]. Por aquí, de los deficientes niveles de competencia, objetividad e impersonalidad con que la administración hizo efectivas las variantes a menudo desorientadoras de un mismo estilo de política económica y del cortejo emergente de la nueva riqueza suscitada, tomará cuerpo la caudalosa incriminación de corrupción de todo el sistema. Si debe reconocerse que un dictamen social difuso la ha planteado en todas las etapas de industrialización y prácticamente en todas partes hay que subrayar, sin embargo, que entonces adquirió desusada, arrolladora entidad.

Llama la atención a nuestra altura histórica que si tantas y tan sustanciales fueron las identidades entre la experiencia uruguaya del neo-batllismo, la argentina del peronismo y la etapa brasileña Vargas-Kubitschek-Goulart, sea tan "a posteriori" que esta afinidad se subraya. Aquí, debe suponerse, es el mismo carácter amortiguado del fenómeno el que tiene que ver con esta falta de ostensibilidad, de saliencia, con esta —dígase— baja tensión de su modo de incidir. Y el mismo término: "neo-batllismo", con que se le suele distinguir representa, de seguro, el más claro fundamento de esa tibieza, de esa flojedad. Debe admitirse, claro está, que el mero uso del rótulo no descartaría por sí mismo la originalidad del fenómeno ni tampoco lo haría el diagnóstico tardío sobre su verdadera naturaleza: al fin y al cabo peronismo y varguismo fueron prácticas previas a su inscripción en una categoría —la "populista"— que había portado en Rusia y en los Estados Unidos una acepción bastante diferente [51].

(50) Entre nosotros el tema Sadil-Berembaum, incansablemente manejado por la prensa opositora se convirtió, con el correr de los años, en un poderoso tópico político-electoral.

(51) V. Ghita Ionescu and Ernest Gellner (edit): "Populism: its meaning and national characteristics", London, Weidenfeld and Nicolson (hay traducción castellana, en Amorrortu, Buenos Aires).

Sin embargo —y de alguna manera— una convicción generalizada de que el país había reanudado hacia 1948 una tradición política cortada quince años antes y que esta tradición era consustancial con el país mismo, sus posibilidades y sus exigencias, era algo más que un mero espejismo, una falsa representación fomentada —si otras apariencias no lucieran— por el apellido del líder y por el lema del partido gobernante.

Si se comparan las líneas políticas a ambos lados del Plata es posible advertir, para comenzar, una mayor flexibilidad del sistema jurídico e institucional uruguayo para ajustarse a las nuevas exigencias. No en balde tenía el Uruguay una constitución aprobada en 1942 y aún tendría otra en 1950 (esta última de sesgo "antipersonalista") y ambas mucho más ajustadas a una política de asignación de bienes a las masas que el obsoleto texto argentino de 1853 y las limitaciones de las autonomías provinciales con que el peronismo tuvo que iniciar su trayectoria [52].

Pero las franquías diferentes que para una política populista y modernizadora podían representar en los dos países los respectivos textos fundamentales significan relativamente poco sobre el fondo más amplio de una fluidez para el cambio involucrada en el Uruguay por una tradición que ya era una "tradición para el cambio". Si esto es así, tampoco puede rebajarse la importancia que adquirió la incidencia del sistema bipartidario. La legislación electoral, como se decía, tendía a esclerosarlo y a quitarle capacidad de respuesta para nuevas fuerzas que ya estuvieran, por sí, cabalmente articuladas pero esto no significa que no pudiera seguir combinando una pétrea estabilidad en sus apariencias, tradiciones y llamado emocional con una alta elasticidad para recoger y agregar ciertos reclamos sociales, ello, incluso, de una manera mucho más indiscriminada de lo que reclamaría un mínimo de coherencia. Debe observarse aun que esta aptitud para canalizar

(52) Si bien el viejo texto fue sustituido en 1949 por una constitución modernizada y de alta calidad técnica, al establecer la posibilidad de la reelección del Presidente de la República, hizo que ella fuera juzgada por los elementos adversos o simplemente ajenos al peronismo como una mera justificación reeleccionista no contribuyendo así, en modo alguno, ni a flexibilizar ni a legitimar el sistema.

nuevos reclamos tuvo su cara opuesta en un algo más negativo: una corriente político-social nueva que es entubada por vías preexistentes pierde siempre mucho de su energía original al ser tramitada, aun dócilmente, por un aparato institucional demasiado viejo.

Si la tradicional aptitud receptiva del sistema político para nuevos significados queda así apuntada, procede también marcar esa otra constante del desarrollo uruguayo que representó la menor preeminencia comparativa de una clase superior y dominante a planos económico, político, social y cultural. Es posible que esa situación haya sido la razón bastante segura de que en este populismo uruguayo lucieran con una debilidad cercana a la invisibilidad esas consignas igualitarias y antioligárquicas que tanta estridencia cobraron y aun tanta trascendencia tuvieran en el proceso argentino posterior a 1946.

Pero si seguimos mirando a la estructura social se hace relevante asimismo la sustancial ausencia de esos sectores marginados de modo total, tanto en términos espaciales como socio-culturales, que caracterizaron los puntos de partida argentino y brasileño y cuya primera movilización política tanto impacto ejerció [53]. Si

(53) Teniendo en cuenta que hasta 1946 intervino sólo la población masculina y que en el porcentaje de 1958 pesa en cambio el voto femenino, las proporciones de la población activa mayor de 20 años que intervino en las elecciones presidenciales argentinas entre 1910 y 1958 con los siguientes: 1910: 9%; 1916: 30%; 1928: 41%; 1936: 48%; 1946: 56%; 1958: 78% (en Gino Germani: "Política y sociedad en una época de transición" Buenos Aires. Paidos. 1968, págs. 300-301). En Brasil, sostiene F. Weffort intervino en las elecciones de 1933 el 3.5%, en 1934 el 6,5% y en 1950 el 22% de la población adulta —mayor de 20 años— habilitada para votar. Cierto es que operando la inhabilitación del voto por analfabetismo, el porcentaje total variaría: en 1950 el total de inhabilitados alcanzaba al 46,5% ("El populismo en la política brasileña", en "Brasil hoy", México, 1968 y 1970, págs. 54-81). Thomas E. Skidmore en "Brasil: de Getúlio a Castelo", Río de Janeiro, Editora Saga, 1969, p. 237, fija el crecimiento del electorado brasileño de esta manera: en 1945: 5,9 millones de votantes; en 1950: 7,9 millones; en 1955: 8,6 millones; en 1960: 11,7 millones. Para una comparación con el Uruguay establezcamos que en el país el electorado pasó de 318.760 votantes en 1930, a 357.205 en 1938, a 574.703 en 1942, a 649.405 en 1946, a 823.829 en 1950, a 879.242 en 1954, a 1.005.362 en 1958. Claro está que las cifras electorales no son fielmente representativas de los fenómenos de movilización político-social puesto que por un lado habría que restarles, especialmente en las instancias de premovilización el "voto clientelístico" o dependiente y

se le coloca simétricamente con el registrado antes es fácil advertir que los dos polos de explosividad del sistema —el superior, el inferior— quedaban de esta manera singularmente embotados. La síntesis posible es, entonces, que con escaso desplazamiento del eje del poder social y casi ninguna amenaza de promoverlo —aun con escasísima perspectiva de una irrupción que viniera de los niveles bajos según el temor de la clase alta fuera capaz de inferirlo— el populismo neo-batllista —que aun con tantas restas lo fue— consistió a nivel social en un simple desplazamiento de acento. Digamos: un desplazamiento del acento redistributista hacia los sectores menos favorecidos aunque siempre dentro de una coalición de clases y grupos que no sufrió ninguna radical transformación.

También el neobatllismo experimentó la misma dificultad y aun la misma reticencia en movilizar el coligante nacionalista que ya fue marcado en el batllismo original y en la etapa de democracia radical de las primeras décadas del siglo [54]. Las variables "dimensión" y "consistencia" nacionales entran igualmente en juego aquí y muchas razones militan para que en el país no se haya dado con hondura de pasión colectiva nada parecido al nacionalismo de entonación "ufanista" que han conocido o conocen Argentina, Chile, Brasil o México.

Tampoco, sin embargo, debe olvidarse en este punto la cuestión decisiva del "quantum" de presencia foránea, sobre todo en el área económica y en los fenómenos visibles de dependencia y mediatización de las decisiones nacionales en que pudiera manifestarse. En este plano ya había cambiado bastante la condición del país puesto que el Convenio Militar de Asistencia Recíproca con los Estados Unidos fue ratificado en 1953 y las nuevas corrientes de redependencia económica y financiera estaban en curso. Pero así como la reivindicación nacionalista tradicional fue articulada entre 1910 y 1930 a través del partido opositor, entonces, a partir de 1945 y 1950, las nuevas expresiones del nacionalismo y el antimperialismo que reforzaron la tenaz presencia de aquélla

sumarle, en particular en las de plena movilización, la acción del nivel generacional juvenil no habilitado todavía para sufragar.

(54) En "El impulso y su freno" se analiza esta duplicidad.

corrieron por vías sustancialmente separadas (intelectuales, universitarias) del proyecto político e ideológico que desde el poder se propiciaba. Es de creer que también esta simetría vale la pena de subrayarse, aunque sea para aceptar enseguida que queda abierto al debate si los fenómenos de la dependencia, la explotación económica, la mediatización de las decisiones en materia política interna o externa eran tan débiles como podría de lo anterior inferirse o, simplemente, se hacían todavía menos perceptibles de lo que después se hicieron o, cuando menos, parecían menos contradictorios al proyecto de país al que esa mayoría adhería.

Lo cierto es que la línea internacional de Luis Batlle y su partido permaneció fiel a la línea pro-occidental y pro-defensa hemisférica que se había implantado firmemente en el Uruguay en la década del cuarenta como verdadera pauta internacional. Sobre esta base, empero, el populismo uruguayo se unió, aunque moderadamente, a ciertas modulaciones argentinas y brasileñas de política exterior, algo que puede decirse, en especial, respecto a las metas concretas que éstas seguían. La afirmación "occidentalista" fue así aguada —y aun se podría decir condimentada— cuando ella apareció unida (como lo hizo el gobernante en ocasión de su viaje a los Estados Unidos y, crecientemente, en los últimos tiempos de su mando) a cáusticas observaciones sobre la calidad de la democracia que los Estados Unidos decían propiciar en Latinoamérica y a perentorios reclamos de apoyo a los planes de desarrollo económico e industrial que el Uruguay, entre otras naciones del hemisferio, comenzaba a concebir. Y mayor violencia adquirió aun su denuncia del sabotaje que los grandes consorcios internacionales de comercialización lanera hacían objeto a la exportación uruguaya de la fibra, cuando ésta empezó a presentarse, según lo hizo desde entonces, en estado semi o totalmente elaborado [55].

El componente nacionalista de esta peculiar experiencia populista fue, empero, aun con estos énfasis, comparativamente débil. Es este un dictamen que, como resulta fácil advertirlo, se

(55) En Luis Batlle Berres: "Pensamiento y acción", Montevideo, Editorial Alfa, 1965, t. I. págs. 489-537 "et passim".

alinea en forma notoriamente coincidente con todos los anteriores, lo que también ocurre con aquél que merecen otros dos y complementarios elementos que nos faltan agregar para cerrar este balance.

Uno es relativamente menor y tiene que ver con la personalidad misma del líder, variable estratégica de indudable relevancia en el tejido de las coaliciones populistas. Político profesional de raza, brioso gallo de pelea parlamentaria y periodística, Luis Batlle Berres, pese a cierta módica aptitud de arrastre que sería aventurado calificar de "carismática", estuvo siempre mucho más cerca del dirigente partidario de un sistema pluralista estable que del tipo lideral que pudieron representar en América Latina Getulio Vargas, Perón o aun el general Carlos Ibáñez.

Pero muchas de las diferencias que pudieran anotarse entre estos y el dirigente uruguayo dimanaron en buena parte de la escuela y aun de la tradición en que fue formado. En este paso final de la presente reflexión, postulo simplemente que la muy consistente tradición liberal, radical y laica que el cuasi-populismo y su líder asimilaron no dejó de ejercer considerable influencia. Batlle "el joven", personalmente, a través de una firme socialización ideológica familiar; su partido que, pese a considerables retoques se siguió diciendo fiel al viejo batllismo [56], cargaron a la postre contenidos que, pese a tantas diluciones, no fueron fácilmente convertibles a esos típicos compuestos doctrinales ("justicialismo", "trabalhismo") que sostuvieron a las políticas populistas. Póngase nada más que el caso de la enérgica orientación antifascista que desde los años treinta y por más de un cuarto de siglo se generalizó y ahondó en el país. Supongo que no exige dilatada demostración la de que no representó un componente fácil de integrar en esos pragmatismos oportunistas, muy nutridos empero de elementos religiosos, militares, nacionalistas y hasta telúricos con que las doctrinas populistas se presentaron en Latinoamérica a esa altura de su desarrollo [57].

(56) Entre estos reajustes, por ejemplo, la casi total dilución de las posturas antirreligiosas a las que el tiempo y la propia secularización de la sociedad uruguaya habían hecho irremediablemente obsoletas.

(57) Sobre esos componentes religiosos y de otra índole v. José Luis Romero:

8. Un endurecimiento graduado

Con el triunfo del Partido Nacional en las elecciones de 1958, el Uruguay ingresó (y hubo inmediata conciencia de ello) en otra etapa política. Ello no ocurrió sólo porque un partido que hacía cerca de un siglo no ganaba la titularidad del Poder Ejecutivo lo hiciera entonces [58]. Harto mayor importancia posee, fuera de duda, el hecho de que no obstante las diferencias en el modo de su instauración: la vía del cambio legal respecto al primero; su considerable duración respecto al segundo, la secuencia política iniciada no difirió sustancialmente de las reacciones antipopulistas que representaron el levantamiento militar argentino contra Perón, en 1955 y el mando presidencial de Janio Quadros, en el Brasil, durante nueve meses de 1961. En los tres casos la crisis del populismo, sus contradicciones, el cuadro de descalabro económico, indisciplina social e incompetencia y corrupción administrativas actuaron como acicate y justificación para una redefinición variablemente rotunda de los medios y las metas del ejercicio del poder.

Pero también aparece básicamente homogéneo el ahondamiento del proceso de reacción que —tras interludios de mayor moderación en el caso argentino y uruguayo y aun de la reanudación populista con Goulart— representaron el golpe militar brasileño de 1964, el similar argentino de 1966 y la trayectoria del Uruguay posterior a la muerte del general Gestido en diciembre

"El pensamiento político de la derecha latinoamericana", Buenos Aires, Paidos, 1970, págs. 152-163.

(58) Esto impone la precisión de que en 1925 el Partido Nacional había vencido en las elecciones para la integración parcial del Consejo Nacional de Administración (por lo que el Dr. Herrera ocupó por dos años la presidencia del cuerpo) pero manteniendo el Consejo, mayoría colorada y existiendo la Presidencia de la República como el otro sector —y más decisivo por "político"— del Ejecutivo, no puede decirse que el Partido Nacional "ganara" este. Empero, el famoso lapso de "noventa y tres años en la oposición" es, por muchas razones, mendaz, puesto que por varios periodos el Partido Blanco o Nacional fue prácticamente co-gobernante. Esto, aun sin extendernos en la mera continuidad verbal o cuando más emocional que representa para cualquier partido del mundo, a casi un siglo de distancia, la permanencia de su rótulo.

de 1967. Fue desde esa altura desde la que, suponiéndose invariable el anterior rechazo de los modos populistas se sumaron en los casos brasileño y uruguayo los peligros que para la permanencia de la estructura social y del sistema político representaron la radicalización del aparato sindical y los cuadros gubernativos (caso Brasil) o la creciente movilización social y la aparición de grupos de subversión abierta en la hasta entonces apacible sociedad uruguaya. Súmense todavía en los tres casos una profundización de la crisis económica mostrada en el carácter alarmante de todos los índices (tasas de inflación elevadísimas, estancamiento o caída del producto bruto interno, evasión de capitales, subida y casi inmanejable deuda externa, drástico corte de la inversión, devaluaciones, déficit presupuestales y de la balanza de pagos crecidísimos, etc.) así como la notoria incapacidad para enfrentarlos por parte de un aparato político sólo diestro para los arbitrios a corto plazo y el soslayamiento de toda opción dolorosa y seria. Y aun registremos, en los tres casos, una variablemente intensa pero inocultable incidencia exterior representada en lo sustancial por la acción de las agencias diplomáticas, financieras y militares estadounidenses. Fue desde el abierto estímulo y apoyo en el caso brasileño [59] al respaldo algo más demorado o menos abierto y completo en las coyunturas del Río de la Plata pero nunca, puede decirse —y este es juicio mesurado— que haya estado ausente.

El estadio político-social que estos procesos abrieron no admite, como no hace mucho lo examiné [60] una designación unívoca. Y si se rechaza por excesiva extrapolación de contenidos, y aun por escamoteo de su originalidad la de "colonial-fascismo"

(59) V. en T.E. Skidmore, op. cit. Apéndice "Papel dos Estados Unidos na queda do Goulart", págs. 389-399, una apreciación especialmente equilibrada. Sobre las relaciones del Mariscal Castelo Branco con el Agregado Militar de los Estados Unidos: Ronald Schneider: "The Political System of Brasil", New York, Columbia University Press, 1971, p. 124 n.

(60) Sobre la categoría "colonial-fascismo", Helio Jaguaribe en "Brasil hoy", cit. y en "Dependencia y autonomía en América Latina", Instituto Universitario de Investigación de Rio de Janeiro, 1968 (mim), republicado en Aldo Ferrer, Helio Jaguaribe y otros: "Dependencia político-económica de América Latina", México, Siglo XXI. Sobre el análisis y crítica a la categoría "colonial fascismo" mi ya citado trabajo en "Uruguay hoy", cit. págs. 143 y ss.

que Jaguaribe ha prohijado, habrán de preferirse las más genéricas eufemísticas y pálidas de "neo-conservatismo-liberal" o "neo-autoritarismo", o cualquier otra combinación o equivalente de éstas. Pero en una u otra de las opciones, los relevantes puntos de contacto que se ofrecen con las actuales situaciones de algunos estados como Grecia, España, Portugal, Filipinas, permiten inferir que no se trata de un fenómeno local —o mejor dicho hemisférico, latinoamericano— sino más bien una peculiar modulación de los sistemas políticos modernos de base económico-social liberal-capitalista, enclave internacional relativamente periférico a los centros de poder mundial y previas experiencias de movilización política y social de signo radical y aun revolucionario.

Si estos se aceptan como condicionantes válidos del modelo neo-autoritario en el costado atlántico de Sudamérica procede ahora la tentativa de enumerar los elementos o variables básicas que los perfilan.

La cancelación total de los mecanismos de representación y validación democráticas por vía electoral (Argentina), su virtual nominalización (Brasil) o las múltiples formas de ataque a sus fueros y a la autenticidad de sus procesos (Uruguay) han resultado, desde la perspectiva política, el perfil más ostensible. En los tres casos, la modalidad fuertemente autoritaria y aun autocrática de la política del Ejecutivo ha involucrado la intimidación y aun la represión drástica de todas y cualesquiera de las manifestaciones de disidencia que estos procesos tendieron a suscitar. Ello, sin detenerse en todo lo que estas políticas, invocando variadas pero concurrentes razones de "seguridad nacional", de "paz pública" o de "defensa del orden social" pudieran vulnerar y aun hayan vulnerado efectivamente todo el repertorio de derechos y garantías individuales y sociales (tan a menudo violadas y tan al extremo como la dilatada institucionalización de procedimientos de tortura, de confesión compulsiva) lo involucra.

En los tres casos, igualmente, ha jugado un papel fundamental una intervención militar de muy compleja motivación. Y es que en alguna circunstancia la institución castrense ha aparecido actuar determinada por sus inerradicables valores institucionales y corporativos específicos (unidad, orden, disciplina, jerarquía) y la natural afinidad de éstos con políticas de corte autoritario y

conservador mientras en otras ha lucido como predominante, sino contradictorio con el anterior, el impulso a la preservación de la estructura jerárquica, vertical del estamento contra el riesgo de una autonomización o movilización independiente de sus niveles bajos [61]. De modo más genérico también la intervención militar ha aparecido ser reflejo de la mayoritaria pertenencia de su cuerpo de oficiales a unos sectores medios de reflejos conservadores y éstos acentuados aun en coyunturas de alta perplejidad. Pero tampoco se está en el caso de despreciar el refuerzo que a esta postura pueda haber llevado la labor de socialización ideológica de signo anticomunista y antisubversivo que incluyó el proceso de coordinación militar norte-latinoamericana a partir de la Segunda Guerra Mundial. Y aun no faltará, seguramente, quien destaque la condición irrecusable de las fuerzas armadas de ser instrumentos puntuales de una estructura de clases cuando ésta enfrenta reales condiciones de amenaza.

Si esto ocurre con las probables motivaciones también las modalidades de la asunción militar al poder han solido variar y aun sería posible graduar una gama de ellas. Una gama que iría desde los propósitos del golpe de Estado de Onganía en 1966 (larga vigencia de la "revolución", disolución de los partidos políticos) hasta los indecisos y complejos procesos de co-gobierno y dominio en "materias reservadas" (Uruguay, 1972-1973), pasando por la coexistencia de un sistema civil superviviente y modificado y una hegemonía militar abierta como fue el caso de Brasil tras el levantamiento de 1964 y hasta 1968, sobre todo.

En los tres procesos, igualmente, pese al tradicional liberalismo económico antiestatista de las clases y sectores que alentaron o apoyaron más los cambios, el Estado ha aparecido como organizador de la nueva ordenación político-social y fundamental centro de decisiones para una reorientada política económica. Y en los tres casos, asimismo, un emergente sector social tecno-burocrático civil y militar ha resultado instrumentado y efectivando

(61) Para la Argentina V. Alain Rouquié: "Adhesión y control político del ejército en el régimen peronista", en "Aportes", Paris, N° 19, enero de 1971, págs. 74-93 y esp. 85-87. Sobre el Brasil la ya citada obra de T.E. Skidmore, págs. 321; 358-360; 362-364.

tales políticas. Ello, dígase de paso, ocurre no sin la fundamental ambigüedad implícita en que si su preceptuada, aceptada y asumida función ha sido la preservación del "statu quo" social a través de los arbitrios más eficientes de planificación y de control, la identificable perspectiva profesional y aun ideológica de esa tecno-burocracia militar y civil no siempre ha coincidido y aun ha solido disentir con los puntos de vista de los sectores propietarios y empresarios superiores y sus clientelas, que constituyeron el más fuerte respaldo social de las nuevas situaciones [62].

En forma expresa en los casos de Argentina y el Brasil y más tácita e inarticulada en el Uruguay, los tres procesos han implica-

(62) Más ostensible en el caso del Brasil que en los de la Argentina y, sobre todo, el Uruguay. Aunque falten estudios de "carreras" (el excelente de los profesores Max G. Mannwaring y Walter J. Stoll: "Elite recruitment and functional change: a comparison of the civilian and military appointed cabinets in Brasil: 1958-1971", Midwest Association of Latin-American Studies, october 1972, sólo aborda parcialmente el tema) el examen de ciertas actuaciones —caso de las de Delphim Netto, de Paulo Rei Vellozo, etc.— el de los conflictos entre el gobierno y la familia Mesquita y "O Estado de Sao Paulo" (1973), entre Netto y los mandos militares sobre la distribución del ingreso (1972), sería enormemente retributivo. Más en general, el fenómeno emergente de la tecno-burocracia como estamento social decisivo en todos los sistemas económicos desarrollados —sean ellos capitalistas o socialistas— su significación, su ideología, su identificación o su especificación respecto a la clase propietaria de los medios de producción parecería ir en camino a convertirse en la cuestión decisiva de la problemática político-social de las próximas décadas. Desde el libro de Rizzi, los análisis de Trostky del sector superior soviético, "La revolución de los directores" de Burnham, "La nueva clase" de Milovan Djilas, "La nueva sociedad industrial" de Galbraith se barrunta el fenómeno. Dos recientes textos importantes sobre él y la crítica marxista que busca reducirlo a proporciones manejables dentro de sus coordenadas ideológicas: "Economics of Public Purpose", del mismo J.K. Galbraith (Houghton Mifflin, 1973) y Daniel Bell: "The coming of Post-Industrial Society", New York, Basic Books, 1973. Sobre la crítica aludida: Christopher Lasch: "Take me to your leader", en "The New York Review of Books", october 18, 1973, págs. 63-66 y Paul M. Sweezy: "Galbraith's Utopia", en la misma publicación, november 15, 1973, págs. 3-6 (fue publicado, aunque incompleto, en "Opiniao", brasileña, de 19 de novembro de 1973, págs. 9-10. Un penetrante estudio del fenómeno en la sociedad socialista es la obra de Peter C. Ludz: "The Changing Party Elite in East Germany", Cambridge, M.I.T., 1973. Un original replanteo del pensamiento marxista considerando aspectos fundamentales del tema, es el de Torcuato S. Di Tella: "La división del trabajo y el concepto marxista de clase social", Buenos Aires, Instituto Torcuato Di Tella, octubre de 1973, trabajo interno Nº 15.

do la llana aceptación del esquema llamado de "desarrollo capitalista dependiente". En el significado que ese esquema asumía y asume en los sectores dominantes latinoamericanos esa aceptación se fundó (aunque esto más allá del factor no por cierto ausente de corrupción y colusión personal [63]) en la insuficiencia tecnológica e inversora de un desarrollo capitalista pretendidamente autónomo: es decir, en las escasas sino nulas posibilidades de un crecimiento autogenerado y autosostenido del sistema económico tal como ellas se veían mediados los años sesenta. Como el corolario de esta premisa se derivaba así la aceptación del ajuste a las pautas de un proceso de re-dependencia y reinscripción del circuito económico nacional en el dinamismo de una estructura mundial liderada por las corporaciones multinacionales y los conglomerados multiproductivos.

De tal opción, en verdad, podrían deducirse todos los rubros de este presente y tan sumario esquema. Pero tal deducción, empero, puede reducirse a lo esencial si se destaca que a plano económico y político la aceptación del desarrollo dependiente implicó prioritariamente la erradicación de casi todas las cautelas y condicionamientos que habían presidido hasta entonces el ingreso, la acción y la disposición de los frutos de la inversión extranjera, una renuncia inseparable de la otra frontal a mantener los centros de decisión en materia productiva y distributiva dentro de las propias fronteras. El "modelo industrial neo-dependiente" sustituyó en Brasil al movimiento hacia la reagrarización como "verdad económica" a restaurar (y de la que algunos, caso de Furtado, sospecharon que sería el proyecto económico del régimen instalado en 1964 [64]). En la Argentina ambos proyectos han mantenido inestables relaciones de prioridad y en el Uruguay, por último, puede decirse que el único modelo tentado ha sido el de la intensificación agraria, opción comprensible dadas las casi nulas posibilidades que la magnitud del mercado y los recursos disponibles representan para pasar aún a la más modesta planeación de in-

(63) En este estudio son muy relevantes algunas historias personales, caso de las de Juracy Magalhaes y de Roberto Campos.

(64) V. Celso Furtado: "De la República Oligárquica al Estado Militar", en "Brasil hoy", cit. págs. 23-27.

dustrias de base.

De cualquier manera, y en una u otra forma de equilibrio, han resultado comunes los arbitrios financieros y fiscales para una "verdad económica" dictada por los supuestamente automáticos mecanismos del mercado contra toda la "artificialidad" monetaria y cambiaria por tanto tiempo vigente. Lo que equivale también a decir: contra todas las medidas que habían hecho del aparato estatal un redistribuidor del ingreso nacional en beneficio de los sectores más débiles o de las actividades productivas más incipientes frente a los grupos más fuertes en términos de propiedad o de control o de capacidad exportadora.

Habiendo dimitido así de esta función arbitral o de compromiso social en cierto modo "neo-bonapartista", si el aparato no sufrió un radical dimensionamiento de formato dejó, en cambio, de promover esa corriente de asignaciones hacia los niveles bajos de la sociedad que ya, bajo las formas particularistas del "patronato", ya bajo las más generales de la "justicia social" tendían a amortizar las inequidades del sistema y mantener y acrecentar el apoyo político que recibía el equipo gobernante. Ahora, directa o indirectamente, toda la política económica y financiera de corte neoclásico u ortodoxo tendió a hacer difícil sino imposible esta función: las formas autoritarias de estabilización repercutiendo sobre esa área de su ejercicio más fácil de controlar que son los salarios (y que fueron denunciados en cuanto costo más saliente como causantes de la inflación); la restauración del equilibrio presupuestal en todo lo que ello fuera posible; la de la balanza de cuentas y de pagos; la alta impositividad sobre los consumos masivos; la fijación de la divisa nacional de acuerdo a la meta prioritaria de hacer competitivas las exportaciones: todas estas tácticas, en suma, son los "items" de una política económica global cuya estrategia básica consistió en la recapitalización del sector privado a través de incrementadas ganancias y la compresión —cuando no la regresión, según ocurrió sobre todo al principio— de la parte de los salarios en un ingreso nacional total acrecido [65].

(65) Sobre este tema tan discutido: el estudio de M.C. Tavares y José Serra: "Más allá del estancamiento: una discusión sobre el estilo de desarrollo reciente en Brasil", (en "Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales", Santiago de Chile, FLACSO, Nos. 1/2, junio-diciembre, 1971, págs. 2-38), el de José Serra: "El milagro económico brasileño ¿realidad o mito?", en idem, Nº 3, junio, 1972, págs. 171-215, el de Albert Fishlow, basado en la aplicación del coeficiente de Gini, la tesis de Duarte y Hoffman (Universidad de Sao Paulo), etc. Para los sectores bajos y medio-bajos la evidencia concurrente de todos ellos es la de una ostensible disminución del porcentaje de ingreso nacional percibido por esos sectores, aunque ocurriendo ello dentro de un ingreso global muy acrecido no representa pérdida absoluta y aun significaría en muchos casos alguna ganancia (todo esto tomando como base los censos generales de 1960 y 1970 que no iluminan sobre la aguda, casi insostenible deprivación de los años 1965-1968).

Sólo a necesidades de orden expositivo responde este esbozo de un modelo político-social bastante conocido y debatido. Es de suponer, en cambio, que ha sido y es menor la atención a los menos relevantes aspectos ideológicos, éticos y culturales que casi indefectiblemente acompañan a la modalidad neo-autoritaria. Me refiero al fuerte énfasis en una moralidad sostenida en decisiones y comportamientos supuestamente no condicionados por el peculiar enclave económico y social de cada sujeto. O la apelación —a menudo fracasada en cuanto acicate a un apoyo global— a las instituciones y fuerzas tradicionales de la sociedad —Iglesia, Familia— como aportadoras de actitudes de aceptación y disciplinamiento de la conducta. O al combate de todas las manifestaciones advertibles de una potencial "contrasociedad" en nombre de los valores del orden contra la subversión, de la lealtad a la comunidad contra la traición a ella, del derecho a la legítima defensa funcional y profesional sólo en cuanto él sea puntualmente desglosado de toda supuestamente tendenciosa e inadmisible "politización" de las reivindicaciones. La postura ofensiva contra los sindicatos, las universidades, el gremio estudiantil, la mayoría del sector intelectual, el clero radicalizado ha caracterizado a todos los neo-autoritarismos latinoamericanos aunque las medidas concretas hayan variado mucho y puedan seguir haciéndolo. Pues obsérvese que ellas han ido desde la abierta tentativa de erradicación de modo de hacerlos innocuos como centros de resistencia, la intervención o la negociación con el fin de alterar sus metas o una empresa de duplicación que en el caso de las universidades y a veces de los sindicatos buscó amortizar sustancialmente su previo impacto y una, por fin, frecuente acción de respaldo que aparece

movida por el fin de imponer un supuesto parecer de unas mayorías (silenciosas) contra unas minorías intimidatorias. Todos estos extremos básicos, que no excluyen comportamientos más generales de recelosa vigilancia, de tentar dentro de algunas instituciones —como el caso de la Iglesia— realizar la distinción entre el trigo y la cizaña o, más llanamente, golpear a sus directivos con prisiones, retenciones y variadas incomodidades.

Realizado este recuento demasiado ajustado difícil sería negar que si se desdeñara el considerable grado de vigencia que tal esquema político-social ha tenido desde 1968, todo lo ocurrido en el país durante los últimos cinco años asumiría tan fantasmal carácter, tan errático e inescrutable parecería que su mera descripción acrítica llegaría a importar una verdadera dimisión de la inteligencia. Descifrar un sentido coherente en el curso de los acontecimientos es la tarea más eminente de la comprehensión histórica y aun el mejor empleo de la lucidez que todo hombre común hundido en la circunstancia y sin bastantes puntos de referencia, pese a todo, dispone.

Si, como es de creer, este ejercicio es, en cierto grado, insoslayable, no es de extrañar entonces que en los más diversos sectores del Uruguay haya sido percibido el verdadero salto cualitativo, el ingreso a un período diverso y plenamente identificable que abrieron en 1967 —a poco del fallecimiento del Presidente Gestido y del acceso de su Vice al mando— las clausuras de periódicos y la disolución de algún partido y varios movimientos políticos. Pero aun más agudamente marcaron ese tránsito los decretos de congelación de salarios y precios y la nueva vigencia de medidas de seguridad (de seguridad ininterrumpida hasta el presente) en junio de 1968. Una percepción tan común, tan caudalosa puede, empero, ser negada (aunque sólo a medias) por quienes argumentan que el hilo de oro que uniría el viejo y el nuevo estilo político sería el que representan los arbitrios de defensa de una sociedad amenazada por la subversión y la conspiración foránea en su estilo de vida y en sus valores tradicionales y más íntimos. Pero (y esto es cojera común de estas justificaciones y daño objetivo irreparable de las situaciones correspondientes) no es aventurado subrayar que con muchos de los procedimientos que pugnaban por su defensa, los encomiados y a veces tan encomiables valores y estilo

de vida que fundaban la enfatizada convivencia uruguaya hubieron de quedar irremisiblemente vulnerados, a un costado del camino y que la posible terapéutica de su reflotamiento represente cuestión nada fácil y menos abreviable [66].

Quien haga memoria de la vida del país en estos últimos cinco años y de toda la violencia y muerte que los han flanqueado puede muy bien juzgar irresponsable y hasta un poco cínico (o por lo menos sospechoso) que todavía intente seguir moliendo con ellos en el molino de la amortiguación. Sea, y arrostro el equívoco. Pues lo que se trata de comparar no es el período de Pacheco Areco y sus hasta ahora más o menos extremosas postdatas con los tiempos del primer colegiado, los del presidente Amézaga o los "ocho años blancos". De lo que se trata ahora, como resulta obvio del propósito general de este planteo, es de explicar por qué en el Uruguay no tuvo curso un proceso del tipo argentino o brasileño y todas las consecuencias que en ellos se registraron, ya sean gobiernos militares instalados para quedarse poco menos que indefinidamente, disolución de partidos políticos o total reordenación de las estructuras partidarias, intervención frontal del sistema universitario y remodelación posterior o plena implementación del desarrollo capitalista-dependiente con ingreso masivo de inversión extranjera, etc. [67].

Debe anotarse con la mayor brevedad, puesto que habrá de volverse al punto en un período posterior en que ésta aparece (insanablemente) (gravemente corroída), la importancia que la tradición de profesionalismo-abstencionismo militares ha tenido en el país. Es, en verdad, un factor que debe ligarse a otros y explicarse por ellos, el mayor sin duda, de los cuales fue el representado por la integración política del cuerpo de oficiales —y por el natural efecto disciplinante de ésta— en el partido que por muchas décadas dominó la escena. Menor, pero nada despreciable, debe haber sido también la intensa internalización que aquel cuerpo

(66) En "Uruguay hoy", cit. Como no sea el respeto a la propiedad privada y a sus derechos lo que difícilmente podría representar un atributo muy específico, muy típico de un "modo de vida uruguayo" que incluyó la guerra civil y sus secuelas.

(67) Escrito en abril y mayo de 1973.

realizó de los valores liberal-democráticos —y éstos con claro sesgo masónico— y que esos mismos valores se identificaran tanto con la ideología del partido dominante como —puestas al margen ciertas disidencias— con los de la sociedad global. Es de pensar, igualmente, que las dimensiones y condiciones de la nación tuvieron peso, al no generar la existencia de esa zona de conmixtión industrial y militar (el famoso "complejo" del "farewell address" de Eisenhower) no ausente en los casos argentino y brasileño y tan proclive a promover comportamientos intervencionistas abiertos o discretos. Pero igualmente es de creer que debe imputarse a la dimensión nacional y al alto nivel de proximidad física que impone la ausencia de esa función necesaria de integración social y física a cumplir por parte de las fuerzas armadas y que tan alta relevancia tuvieron (como se muestra en los casos de Brasil y el Perú) en la concientización política de otros institutos militares latinoamericanos.

Tampoco creo que, puestos en la pista de los determinantes de esta aminoración, pueda rebajarse la ya aludida menor intensidad que exhibió en el país la versión del modelo populista entre 1948 y 1958. Aquí vale la pena también subrayar la importancia de esa transición indecisa que representaron los dos períodos de gobierno colegiado nacionalista (1959-1967). Durante ellos, se debe decir, todas las pragmáticas económicas del neoliberalismo fueron puestas en práctica o por lo menos intentadas. Fuerte apoyo a la producción rural a través de los mecanismos monetario y cambiario, reordenación "realista" de estos últimos, desmontaje —si bien titubeante— del sistema de tasas, subsidios y "precios políticos": todo eso, además de siempre voceados y poco cumplidos propósitos de redimensionar el Estado y podar la burocracia se cumplió o trató de cumplir. Pero el orden jurídico y político se mantuvo en toda su integridad y algunos pasajes de "medidas prontas de seguridad" no desbordaron en duración y contenidos lo que ya era tradicional. Tampoco existió el más o menos torrentoso ingreso de inversiones e iniciativas extranjeras que conocieron Argentina y Brasil después de sus golpes militares y que, como ya se ha dicho, ni los recursos naturales del país ni la dimensión de su mercado alientan excesivamente.

Con esto se toca otra y tan decisiva variable-constante de todo nuestro siglo XX, como ha sido la relativa debilidad de la incidencia exterior en nuestros procesos políticos internos, un fenómeno al que se ha hecho más de una vez referencia y que debe entenderse, también lo reitero, de modo comparativo. Y comparativamente quiere decir aquí tanto en relación a nuestro mediatizado siglo XIX, como en cotejo de impactos estructurales respectivos con otras naciones de Latinoamérica, caso de México, o Chile, o Brasil, o Bolivia, o incluso, la Argentina. La mayor debilidad de ese impacto estructural en el Uruguay se hace entonces muy saliente, todo ello claro está dentro de esa envoltura general al continente de condiciones de "interdependencia altamente asimétrica", una expresión algo amanerada pero que creo mejor que la panfletaria, despistante y tan estereotipable de "dependencia". Es de pensar (aunque esto sea también reiterativo) que así lo determinaron el valor territorial primordialmente estratégico del país, zona de vigilancia y apoyo entre los dos grandes vecinos, la falta de recursos minerales, las dimensiones del mercado, la base de una economía agropecuaria generada desde un sistema de propiedad y producción sustancialmente controlado desde dentro.

Afirmado lo anterior, debe por supuesto señalarse que la redefinición de estas condiciones en el cuadro de la reordenación de las estructuras mundiales del capitalismo ha sido decisiva. Ya se hizo referencia a la expansión de las unidades semimonopólicas, oligopolios, monopolios, conglomerados, etc., así como a los respaldos políticos, culturales y militares (tampoco carentes de sus propias esferas de motivación) que desde los Estados Unidos se prestaron. De cualquier modo, y aunque esto involucre un complicado y tal vez insoluble problema de causación histórico-social, puede defenderse que el impacto de estos factores fue en el país menos masivo que en otras áreas nacionales. Lo que vale decir igualmente, que la refracción local de algunos de ellos y la índole endógena de muchas formas del proceso han tenido considerable relevancia y ha sido sobre todo a nivel operativo más que estructural que la acción de incidencia (y la interdependencia asimétrica) se han hecho visibles [68].

(68) Se trata especialmente del entrenamiento, adoctrinamiento y supervisión de las acciones represivas del personal militar y policial por parte del personal mili-

Si bien lo que sigue pueda haber sido compensado y aun cancelado por la efectividad que tuvo inicialmente el movimiento tupamaro, también representó un factor de amortiguación la menor peligrosidad que, sobre todo hacia 1968 y a los ojos de una postura social conservadora, asumía la izquierda política y gremial tradicional. Se trataba de un sector activamente movilizado, que estaba ejerciendo un control sustancial de ciertos grupos de la sociedad urbana y determinado nivel generacional (estudiantes y centros de enseñanza, intelectuales, asociaciones y sindicatos de las capas medias y obreras) así como también tenía abiertas zonas de crecimiento pausado aunque sólido en las nuevas generaciones de esos mismos niveles sociales. De cualquier manera ese crecimiento aparecía (y aparece aún) comprimido por la predominante pasividad y conservatismo de la mayor parte de los sectores rurales medios y bajos, el considerable conformismo de las capas medias y esa dosis visible de apatía y aburguesamiento que todo sistema de producción industrial y cualquier aparato medianamente complejo de servicios parecen tender a generar en los trabajadores manuales que no se logra dinamizar a través de una compleja, costosa y permanente acción que ha de tener su centro en la fábrica u otros lugares de trabajo.

De cualquier modo, en suma, con retoques o sin ellos, este cuadro difiere drásticamente del que ofrecía en Brasil hacia 1964 la gran masa urbano rural que se ponía lentamente a ritmo de aluvión, en marcha bajo la acción de los cuadros político-administrativos y los sindicatos paraestatales [69]. Y como es obvio difiere también de la difusa pero inquebrantable mística de masa, de la espera "sebastianista" que representó desde 1955 el peronismo en la Argentina.

tar o paramilitar de los Estados Unidos. Sobre el punto: Horacio Veneroni: "Estados Unidos y las fuerzas armadas de América Latina", Buenos Aires, Ediciones Periferia, 1971, págs. 25-30; Robert P. Case: "El entrenamiento de militares latinoamericanos en Estados Unidos", en "Aportes", Paris, Nº 6, octubre de 1967, págs. 44-56; Duncan Powell: "Military Assistance and Militarism in Latin America", en "Western Political Quaterly", 18, june 1965, págs. 382-392.

(69) V. Shepard Forman: "Unity and Discontent: Study of Peasant Political Movements in Brazil", en "Journal of Latin American Studies", Cambridge University Press, vol. 3, pt. 1, may 1971, págs. 3-24.

Con todo, quizás haya sido la índole conservadora de los sectores medios la que, como factor de amortiguación, haya jugado un papel de más responsabilidad en el proceso. "Conservador" es, como resulta obvio, un término del lenguaje político-social tan cargado —y aún más— de ambigüedades como lo están todas las palabras-claves de éste. Por eso, y sin tiempo para ahondar en precisiones, hay que hacer de nuevo mención a la experiencia global de más de medio siglo de duración de un conjunto social que ganó niveles bastante aceptables de vida según las pautas de la época, se conformó más tarde básicamente con ellos, se conforma tal vez todavía o, lo que es prácticamente lo mismo a todos los efectos vive en el temor y temblor de sentirse al filo de perderlos y sólo, ayer y hoy, concibe como sustancialmente sólidos e idóneos para mejorar su lote los márgenes que aún ve (o aún veía) abiertos para el ascenso personal y familiar. Esa colectividad teme concreta pero sobre todo difusamente cualquier cambio drástico en el que pudieran arriesgarse sus muchos, pequeños y arrebañados privilegios y sancionarse, aun a través de una renovación general de todo el sistema, su bajo nivel de productividad, adhiere a ciertos valores, privacidad, seguridad, tranquilidad y ocio como sinónimos de libertad, de justicia, de paz, de bienestar y por ello parecería erizarse —no siempre conscientemente— ante cualquier violento proceso social que involucre —como es común que en el caso ocurra— un alto costo en términos de esos valores adheridos y preferidos. Di Tella se preguntaba no hace mucho tiempo [70] por qué la clase media argentina no se hizo conservadora en los términos en que lo hicieron la brasileña, la chilena y la uruguaya. Y si buscamos las razones de tal excepción, podríamos hallar como una de considerable peso la de que la clase media argentina nunca haya llegado establemente a participar del poder político-social efectivo; ello significaría también que, al revés de la nuestra, no vivió, coparticipando de ese poder, la experiencia del rechazo del populismo, la ruptura con la clase obrera cuyos reclamos veía como motor de la inflación y el decrecimiento económi-

(70) En "La busca de la fórmula política argentina", en "Desarrollo Económico", Buenos Aires, vol. 11, Nos. 42-44, julio de 1971 a marzo de 1972, págs. 317-325.

co y de todo eso, como corolario, la adhesión, generalmente tácita, a quienes propugnaban el modelo neo-oligárquico o neoconservador. Si esta reconstrucción de un proceso tan ambiguo de estados de espíritu no es errónea, es de creer que ella explica bastante bien el que la clase media uruguaya, que vivió el proceso en forma exactamente inversa, adoptara más tarde una postura también mayoritariamente diferente a la que se asumió del otro lado del Plata.

Digo "mayoritariamente", pues no hay que olvidar que desde esas capas medias se alumbró igualmente el fenómeno tupamaro, importando así una bifurcación de actitudes que la clásica heterogeneidad de esas capas medias no hace demasiado excepcional. De cualquier manera, los caracteres esbozados en primer término aparecen en condición de dominantes y dígase para concluir con ellos que al no exigirle a la nueva constelación de dominio una política aun más dura (algo de eso ocurrió en Brasil en 1964) confirma la índole amortiguadora del proceso que aquí se subraya.

Sostener, adviértase por fin, la relevancia causal o condicionante del sistema jurídico en una coyuntura política de agudo conflicto resulta escandalosamente anticuado, pero mucho habría que decir de la flexibilidad de la estructura institucional uruguaya y de como ella permitió la escalada autoritaria, permitiéndole hacer pie en la carta constitucional de 1966 (sólo en grado, aunque sustancial, más ejecutiva y "ejecutivista" que las anteriores) pero, sobre todo, en las muy tradicionales "medidas prontas de seguridad". Las constituciones tienen habitualmente disposiciones específicas para situaciones de excepción en lo exterior o en lo interno, pero el largo oficio que las medidas de seguridad habían ido adquiriendo en el país desde el decenio del 50 permitió que, a través de un brusco adensamiento de su contenido represivo se llegara a una condición en la cual, bajo el mantenimiento formal de todo el aparato gubernativo y estatal y de los mecanismos de relación y regulación preceptuados para él, el espíritu, el "neuma" de las instituciones pareciera transmigrar. Y sólo quedara —sólo quedó— una letra de ellas de trazo cada vez más titubeante, más evanescente.

9. Una salida también imprecisa

Es sobremanera conocido que distintos procesos, aunque ambos de carácter distensivo parecerían haber roto en la Argentina y el Uruguay el esquema más rígidamente neoautoritario. O, precísense los términos, parecen haber evitado hasta ahora su inscripción y su adscripción al llamado "modelo brasileño". En ambas sociedades del Plata es de suponer que han actuado, para decidirlo así, un par de factores comunes y de sustancial incidencia.

Un más alto índice de resistencia social a la adopción de un modelo de tal carácter sería el primero. La mayor consistencia y combatividad de la clase obrera —sobre todo en la Argentina— puede ser una de las razones del fenómeno pero también Di Tella ha destacado (a mí la aserción me resulta por lo menos discutible) la mayor complejidad de la estructura social rioplatense respecto a la del Brasil.

También habría obrado, empero, la relativa magnitud o entidad de los premios sociales, de las retribuciones que, comparativamente por igual con el Brasil, la aplicación del modelo representaría. Y esto tanto en ellos mismos como en su capacidad para compensar los costos de violencia, represión y regresión (aún temporaria) del ingreso de grandes sectores sociales que tal versión acarrearía. Aquí vale la pena agregar que estos que llamo "costos" de tal modelo no han estado ausentes ni muchos menos del proceso rioplatense cercano aunque hayan sido menores —como menores lo han sido asimismo los logros— que los que ha irrogado la implantación del "modelo brasileño".

Pero no es, por cierto, el proceso argentino el que desde ahora me interesa sino la última etapa, en indeciso curso, del que vive el Uruguay.

Desde el 8 y 9 de febrero de 1973 se han producido en el país acontecimientos que permitirían marcar un verdadero tránsito cualitativo a una nueva etapa política, caracterizada por formas de intervención y poder militar bastante difíciles de identificar dentro de las tipologías elaboradas para estos fenómenos.

Se trata, secuencialmente hablando, de una modalidad a medio camino entre el "gobierno directo" y el "indirecto", con contenidos que parecerían oscilar entre un cierto "poder de veto"

o de "control" ejercido en toda clase de asuntos a un "dominio en materia reservada", en este caso todo lo atinente a una meta de "seguridad nacional" entendida en la más amplia y efusiva de las acepciones. La institucionalización del COSENA (Consejo de Seguridad Nacional) [71] en la estructura formal del gobierno es la manifestación más ostensible de un nuevo sistema de relaciones de poder cuya textura y contornos lucen por ahora como demasiado fluidos para que cualquier teorización más puntual tenga sentido.

Con todo, explicar lo ocurrido a la luz del proceso inmediato anterior no es difícil. Un ejército profesional y neutral —sino apartidario— sin otro proceso de politización coherente que el muy sumario a que se vió sometido a lo largo de los años de pentagonización técnica e ideológica que ha vivido su cuerpo de oficiales, fue encargado un día de una tarea concreta [72]. Se trataba ya no sólo de reprimir sino de eliminar la actividad subversiva entonces creciente, la original modalidad paraguerrillera del movimiento tupamaro y algunas formas conexas de disenso violento. Lo hizo exitosamente, no tanto durante los siete primeros meses de empeño sino a partir de abril de 1972 en que el recurso a las ya clásicas recetas del coronel Massu no tuvo ya disimulo. Pero en esta actividad, ese mismo ejército descubrió por el camino una serie de realidades nacionales respecto a las cuales vivía muy ajeno. Fue como una superficie que entra en contacto con otras superficies. Y la lucha contra los tupamaros se convirtió en una de esas relaciones "agónicas" o "agonales" en las que, mediante una dialéctica de interacción, de acción recíproca, algunas, o muchas, o todas las posiciones del enemigo son percibidas y conceptualmente procesadas por el rival. Estos dos tipos de actividad: percepción, reconsideración forzosa de lo que como información llega son probablemente mejor descripción de lo ocurrido que la suposición de una "seducción" ideológica de la oficialidad por obra de las posturas revolucionarias (lo que, sin embargo, puede muy bien haber ocurrido en algunos casos y el inverso también). Lo

(71) Desde el 23 de febrero de 1973 lo forman el Presidente de la República, los Comandantes en jefe de las tres armas, cuatro ministros y el Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

(72) Decreto 566, del 9 de setiembre de 1971.

llanamente seguro podría ser entonces que para buena parte de los niveles medios de la oficialidad encargados de la tarea, a través de la relación agonal que es el interrogatorio del detenido, se hicieron por lo menos "ideas a pensar" (según Vaz Ferreira decía) algunas actitudes o dictámenes sobre el problema uruguayo de la tierra, sobre la mediocridad o venalidad del personal político y alto-administrativo, sobre los lazos de dependencia económico-financiera y política que sujetan al país, sobre la modernización de sus instituciones, sobre las posibilidades y el drama de su juventud.

Tenga el peso actual que tenga tal, por lo menos "distinta", perspectiva ideológica, parecen en cambio bastante seguros dos resultados, altamente novedosos y motivadores para los alcanzados por ellos.

Primero: después de dos tercios de siglo de burocratismo rutinario y del "tradicional ostracismo en sus unidades" [73], el personal armado encontró una tarea concreta y capaz de afectar a la sociedad entera y, lo que es más importante aún, logró éxito en ella.

Segundo: después también de dos tercios de siglo de serles internalizadas las pautas de una neutralidad y un apoliticismo a las que no parecía incomodarles que les conviniera ser colorados y/o afiliarse a la masonería, los militares descubrieron el gusto y la función de la actividad política. Además, y esto era inevitable, alcanzaron la certidumbre conexa de que el apoliticismo es también una política y una ideología, aunque inconfesas y a contrapelo, una intervención mediante abstención. Por una especie de reacción en cadena les fueron reveladas otras cosas. Una, igualmente previsible, es la que los ilustres lugares comunes sobre democracia, instituciones, gobierno representativo, esa especie de "instrucción cívica" liceal que se les había dado en vez de la sociología, la ciencia política, la economía y la teoría histórica que pareciendo peligrosas se les negaron; esos ilustres lugares comunes, repito, no hacían ni podían hacer las voces de la ideología, más modestamente, de la doctrina que para enfrentar una si-

(73) En carta del presidente Bordaberry al senador Ferreira Aldunate (en "Marcha", Montevideo, Nº 1637, del 30 de marzo de 1973, p. 11).

tuación inesquivablemente política necesitaban.

Y asimismo descubrieron que esa situación parecía a su vez necesitarlos.

Me refiero de nuevo, claro está, al famoso "vacío de poder". Es una coyuntura típica que en casi todos los países marginados en vías de modernización y madurez más bien sería la regla que la excepción y que no tiene que ver, como es obvio, con la falta o la presencia de un equipo gobernante formal que da órdenes de rutina que son cumplidas. Sería más bien a nivel social que se haría relevante la carencia de un grupo o de un conglomerado de ellos identificados con un modelo viable de crecimiento y organización, que sea capaz de legitimarse ante el resto de la sociedad en términos que vayan algo más allá del miedo, de la abstención, del pasivo asentimiento. Que cuenta en cambio, lo que es lo mismo, con un apoyo activo, nacido de una promoción de metas y de una movilización de medios lo suficientemente prestigioso y lo suficientemente estable como para poder contar con él, en calidad de recurso, en la circunstancia de inevitables errores y en el enfrentamiento con previsibles obstáculos.

El "modelo neoautoritario", aun atenuado, remató en el Uruguay en el estancamiento productivo, la renovada y desatada inflación, el creciente endeudamiento externo, el deterioro de la moneda y todas las secuelas habitualmente conexas a estos fenómenos. 1972, que fue el año de su tibia aunque incontrastable ratificación electoral fue también la hora de la verdad en el sistema económico. El "modelo neoautoritario" también terminó aunando la más endurecida represión y la más ostentosa corrupción económica y administrativa, todo esto en un grado de armonía, de íntima coherencia y desprejuicio que bien puede reconocerse inhabitual en otras experiencias latinoamericanas de la misma índole. Pero a esos ya dados planos de represión y corrupción (y aun a cierto ascenso de ellos que fue seguramente independiente del modo más dialogal y afable del nuevo presidente) el gobierno del señor Bordaberry agregó algo que al período pachequista, por lo menos en su forma más eruptiva no había mostrado. Ello fue el menudo regateo entre partidos y subpartidos y la puja entre gentes de la más inverificada idoneidad por el nuevo lote de cargos a término. Tal vez alguien pueda haberlo considerado el precio por

la reemergencia del trámite político, tan descuidado y soslayado durante el mesiánico autocratismo del predecesor.

Abrevio. Ocurrió que en este vacío de poder y ante estos resultados las Fuerzas Armadas subieron un escalón más en la cuesta de una intervención.

En febrero comenzó a calificarse de "peruanista" esta creciente presencia. Es de suponer que con el designante se quiere identificar procesos en los que el Ejército y las otras armas, corporativa o institucionalmente, reemplazan de modo formal el personal político representativo (Perú) o lo someten a su vigilancia y regulación (Uruguay). En ambos se pasaría de la lucha contra la subversión armada al proyecto de impostar en sus debidos canales las tendencias al cambio y acelerar su dirección hacia el desarrollo. En cambio, lo que distingue al modelo peruano (no lo digo del tan borroso uruguayo) del brasileño es la concepción de ese cambio y ese desarrollo como "desarrollo nacional independiente", lo que implica la recuperación para la gestión nacional y pública de ciertas áreas económicas básicas así como relaciones con el poder económico externo basadas en el acuerdo más cuidadoso y menudo en vez de en la renuncia (como en el modelo brasileño") a toda contraseña y cautela.

Asunciones más comunes de todos los tipos militares latinoamericanos son la de que ni nuestras sociedades necesitan la revolución a estilo marxista-leninista ni ninguno de sus sectores sociales mayores realmente la quieren; la de que la "ley" y el "orden" deben ser mantenidos a toda costa y la de que un nuevo impulso nacional de transformación se logra cuando son las fuerzas armadas las que se aplican a dinamizar un país. En el lenguaje más sofisticado de la sociología política se dice: cuando son las fuerzas armadas las que reorganizan el "bloque hegemónico" y reemplazando una indecisa o literalmente fantasmal "burguesía nacional" y al desconceptuado personal político pueden así, desde las más fuertes, favorables posiciones de negociación, pactar con el "poder externo", asegurando al país las mejores, entre las asequibles, relaciones con él [74].

(74) Para la versión brasileña del "modelo" v. el penetrante y aun divertido texto de Fernando Henrique Cardoso: "El modelo político brasileño", en "De-

No estoy, y nadie está en condiciones de prever si el caso uruguayo pudiera llevar el proyecto hasta esos extremos y lo ocurrido en los tres últimos meses más bien parecería descartar toda posibilidad de que ello ocurriera. Por lo menos uno de los supuestos es claro —y negativamente claro— y es que el tan conversado hasta hace algunos años "modelo nasserista" (en ciertos respectos el precursor o antecedente del que se localiza en Perú) no tiene la menor factibilidad en sociedades de tipo relativamente diferenciado y complejo, como es el caso de algunas sudamericanas y, en especial, de las del "Cono Sur" [75].

Si se llegará a la suspensión de la vida política y el proceso civil unida a profundas reformas de la estructura económica, política y social o todo quedará en cierta aparatosa lucha contra la subversión social, el privilegio político y la corrupción económico-financiera (aunque respetándose escrupulosamente el "statu quo" social) es la alternativa, el actual dilema que, empero, parece cada vez más decidido hacia el segundo de los términos de la opción. Esto sería, en suma, el proyecto a impulsar, un proyecto tan lleno de dificultades como ese deslinde trabajoso y, de seguro, crecientemente desalentador, entre comportamientos ético-económicos claramente delictivos y disfuncionales y aquéllos que se inscriben en la lógica de una economía basada en el lucro privado.

Empero, si el curso mismo de los hechos es el único que puede despejar ciertas incógnitas, hay dos circunstancias que, de cualquier manera, deben tenerse en cuenta:

1) El ascenso del poder militar sobre el civil no ha sido

sarrollo Económico", Buenos Aires, julio de 1971 - marzo de 1972, Nos. 42-44, págs. 217-248 (También en "Aportes", Paris, Nº 25, julio 1972, págs 7-30, en "O modelo politico brasileiro", Sao Paulo, Difusao Europeia do Livro, 1972 y en "Estado y sociedad en América Latina", Buenos Aires, Ediciones Nueva Visión, 1972). Es claro que dentro del general, el específico "modelo brasileño" se caracteriza por un rechazo más categórico y frontal de toda alternativa de "revolución" (palabra con la que, contra la costumbre habitual de los sistemas conservadores, no juega) y ha concebido la alteración de las condiciones de dependencia en la forma muy especial de una identificación prácticamente total con las fuerzas dependizadoras. Pese a todo, es posible sostener que no escapa totalmente al esquema general.

(75) En esto es compartible el juicioso estudio comparativo de Virgilio Rafael Beltrán: "Dos revoluciones en naciones nuevas: Argentina 1943 - Egipto 1952", en "Aportes" Paris, Nº 6, octubre 1967, págs. 8-29.

abrupto sino, por el contrario, extremadamente graduado. Muchos hitos podrían marcarse en este proceso aunque tal vez todos ellos puedan inscribirse en una especie de dialéctica sumaria que partiendo de la meta suprema de una "seguridad" identificada con la destrucción de los grupos subversivos, regula de acuerdo al criterio operativo indiscutido de "eficacia" todos los actos a ejecutar o todos los mandatos de las jerarquías civiles que tengan que ser "obedecidos pero no cumplidos", según el memorable distingo de las autoridades coloniales españolas en América [76].

2) La adición de una concepción política global que de alguna manera pudiera calificarse como "positiva" tampoco ha sido abrupta sino, también, gradual, un hito podría ser marcado aquí por el discurso que un alto oficial de la Fuerza Aérea pronunció en nombre de todas ellas con motivo de la celebración patriótica del 25 de agosto de 1972.

Como el diagnóstico se puede hacer pronóstico extrapolando hacia el futuro las tendencias del movimiento ya marcado, es dable agregar las notas que siguen como broche final de esta etapa tan mercurial de nuestra "sociedad amortiguadora":

El personal político uruguayo, adiestrado tradicionalmente en el compromiso y en la inventiva constitucional y electoral más rica e inverosímil, es más unificado, tiene más raíces de colusión social, posee más destrezas, dispone de más capacidad de resistencia, en suma, de lo que muchos sospechan. El mal paso que para el poder militar significó el arresto del Dr. Jorge Batlle no atreviéndose, después de tantas insinuaciones, a ir al grano de lo que se le incriminaba, muestra que en emergencias decisivas el elenco político no es hueso fácil de roer. Muestra también que aun extendidamente apegados a ventajas y privilegios (aunque no, globalmente, literalmente, corrupto), huérfano de ideas coherentes e importantes, escaso de verdaderas "carreras políticas" competitivas a aceptable nivel, muy desconceptuado, en suma, goza de la legitimación, dígase "negativa", de que un amplio sector de la población, educado en la tradición civilista, aun con todas estas

(76) En este proceso fue capital el episodio ocurrido en los días 19 y 20 de octubre de 1972 y en el cual, habiendo el Presidente de la República y el Ministro de Defensa decretado la excarcelación de algunos médicos, las Fuerzas Conjuntas los retuvieron por no estar convencidas de su inocencia.

restas, es capaz de prestarle [77]. Y para este personal o "clase política" (como descaminadamente se dice) la legitimación electoral contínua, que nunca le ha faltado, es un factor de refuerzo que el espectáculo de las naciones vecinas, sobre todo de la Argentina, tendió a acrecentar.

En términos sociales sigue siendo posible presumir ese "vacío de poder" entendido en los términos en que ya lo hice. Pero si se realiza la comparación con el mismo nivel argentino, existe esa serie de condiciones tantas veces mencionada —la endeblez de un desarrollo industrial que nunca permitió acceder a una etapa de crecimiento autosostenido, la escasez de recursos, la dimensión inadecuada del mercado— que ha determinado que la clase terrateniente ocupe en nuestro país una posición más céntrica y sólida de la que ocupa probablemente en cualquiera de las sociedades aledañas. Ello no tanto en términos de una participación demasiado sustancial en el producto bruto interno —en ambas naciones del Plata ésta es baja respecto a la industria y los servicios— sino en los de un control mucho más concentrado de la exportación del que en Argentina dispone.

Que la clase o capa media sea casi seguramente más conservadora de lo que en la Argentina lo es (ya se hizo referencia igualmente al fenómeno) es tal vez factor de naturaleza ambigua, como la tesis de José Nun ya lo resaltó. Creo, de cualquier manera, que representando una intervención militar con propósitos "desarrollistas" una quiebra de la rutina, una aventura, una posible incursión en los privilegios de un sector escasamente productivo, **todos sus comportamientos tenderán a militar contra ella** [78].

Por otra parte no favorecen de manera alguna comportamientos políticos globales, de las fuerzas armadas, varios de los factores antes mencionados. No lo hacen, como es probable, la

(77) Así lo señalan algunas encuestas recientes pese al relativo valor que la estrechez del "sampling" suele darle en el Uruguay a tal procedimiento de indagación.

(78) Mucho menos lo hará, evidentemente, contra el sentido indeciso que ha tenido la intervención militar desde Abril, aunque las propias ventajas que irroga la condición militar y que la polémica ha alumbrado más bien parecería reforzarlos en la defensa de los propios (comunicado de las FF.AA. del 23 de marzo de 1973 y reacciones supervinientes en "Marcha", N° 1637, del 30 de marzo de 1973).

ausencia de servicio militar obligatorio y la resta de alcances tradicionales del sector armado sobre el conjunto social que esta falta significa. No lo hacen tampoco la pequeñez y la homogeneidad humana del país al no reclamar de la institución que más en condiciones estaba de hacerlo cumplir entre sus "funciones latentes" esas de "comunicación" e "integración" regional y social que han cumplido otros ejércitos latinoamericanos. Tampoco ha empujado hasta hoy a la oficialidad a asumir una función específicamente política la línea neutralista, profesionalista y civilista tan largamente **prestigiada ante ella, ni la duradera integración del ejército** en una de las dos subsociedades emocionales y políticas que los partidos tradicionales constituyeron [79].

Todo lo anterior ha sido, como se recordará, ya colacionado y explicado. La existencia de "constantes" impone y condena a la reiteración.

Para la observación extranjera de lo ocurrido desde el mes de febrero han resultado perceptibles muchas contradicciones, muchas contramarchas, muchas tolerancias casi inconcebibles con distintos intereses y personalidades (llamémoslas así) si es que realmente esas fuerzas armadas quieren asumir un nuevo estilo de acción y perseguir unas metas más imaginativas, generosas y compartibles que las de la mera represión o la cejijunta prédica de una austeridad que sus propias ventajas estamentales tan grandemente debilita [80]. Este no saber qué hacer, debe reconocerse, no es tampoco un privilegio suyo concebidas como grupo social, pero si se atiende a que son esas fuerzas armadas las que tienen hoy un poder más desembarazado e inmediato, todo parece amonestar que más que quiénes puedan hombrearse con los problemas lo que luce por su ausencia es la percepción de los problemas mismos, y sobre todo de aquellos posibles de solucionar dentro de los estrechos límites que los determinantes externos o internos fijan para ello.

(79) Aunque pudiera decirse también que su agudo desdibujamiento ha debilitado la acción de este determinante hasta su virtual insignificancia.

(80) V. nota 78.

10. A modo de sumario

Una sinopsis de lo desarrollado hace muy factible subrayar la continuidad y permanencia de ciertas características. Y esa continuidad abre el camino a la presunción lógica de que en la muy estable configuración de un limitado número de variables ha descansado la índole amortiguadora (también "amortizada") de los períodos socio-políticos uruguayos respecto a los tipos que llamaríanse "máximos" o "puros" que pueden construirse deducidos del curso histórico latinoamericano y, sobre todo, del de los países vecinos. Esa presencia de "constantes" o "invariables" se despliega a veces con total ostensibilidad mientras en otras se emboza de modo diverso; en ambos casos, empero, esa misma continuidad les da, por su fuerza acumulada —y ya entonces "tradicional"— un poder de incidencia mucho mayor que el que en cada período, aisladamente ponderadas, hubieran sido capaces de mostrar.

Creo, en suma, que si se busca la identificación de esas constantes son seis las que emergen, las que resaltan de una operación de cortes verticales a lo largo de los períodos marcados ("colonial", "desarrollo hacia afuera", "modernizador-radical", "populista", "neoautoritario conservador" y de "ascenso militar") y de los dos intermedios ("insurrección regional y guerra civil-internacional" y "reajuste dictatorial").

Primera: *la relativa debilidad (desunión, floja cohesión, flaqueza de la base económica) de una clase dominante y/o dirigente y, en especial, de su sector terrateniente, así como la de la estructura social en que ambas constelaciones —la más amplia, la más reducida— hubieron de sustentar su poder.*

Ella habría estado determinada, *durante el primer período*, por la inestabilidad y la conflictualidad de la atribución de la propiedad de la tierra, por la carencia de masas sometibles a servidumbre como las que hicieron posible la extracción minera o la agricultura de plantación en otras zonas de América española; por la índole administrativa subordinada de Montevideo respecto a Buenos Aires y por su dominante carácter militar naval y, más en general, por la demora de la implantación social en la región con todas sus variadas consecuencias. *Durante el intermedio de*

"independencia y anarquía" asumen significación especial: la devastación rural originada en la propia guerra de liberación, en el proceso de ocupación portugo-brasileño (1816-1828) y en la guerra civil-internacional que corrió de 1838 a 1851; la marginalización de los sectores sociales dominantes respecto al proceso revolucionario global y la correlativa intensa y semiautónoma movilización de los sectores rurales medios y bajos; la condición de semidependencia del nivel superior en los séquitos partidario-caudillescos y el también correlativo carácter populista-prebendario del mismo sistema partidario caudillesco en cuanto se sostenía en una corriente de asignaciones materiales a los grupos medios y bajos que era restada así a lo recibido por el nivel superior. También la división entre los diferentes polos de atracción externa (Buenos Aires, Brasil, provincias argentinas) y los proyectos políticos implícitos en ellos. *Durante el período de "desarrollo hacia afuera"*: la ambigüedad e indeterminación de la salida de 1851; las continuas guerras civiles y su impacto sobre la prosperidad agropecuaria y la estabilidad de la propiedad; la continuidad de la atracción entre los diversos polos externos de poder con sus consecuencias en la división de la clase superior, un factor-variable cada vez más dependiente ahora de la insuficiencia de la base de recursos materiales y sociales de la entidad soberana consagrada por la Convención de Paz de 1828, es decir, de sus deficiencias para alcanzar la necesaria "autonomía para la dependencia". Agréguese todavía el carácter ya tradicional y autosostenido de las estructuras partidarias y sus efectos sobre la unidad de la clase dirigente; la debilidad del bloque de poder entre 1851 y 1890: clase terrateniente inarticulada, sector financiero extranjero o desmedidamente especulador, estrato mercantil semiautonomizado imponiendo políticas financieras propias ("orismo" versus "papelismo"); disfuncionalidad del apoyo ideológico ("principismo") y semiostracismo político del nivel social más alto después de 1865. *Durante el período modernizador-radical* todo ello refluirá y se acentuará con la aceptación por parte de la clase alta del compromiso político-social con el Estado, la burocracia, las capas medias y la industria sin otra partida que la estabilidad social y una paz interna desde entonces firme. Y agréguese todavía que *durante el período populista* esta posible ya tradicional pérdida de la posi-

ción hegemónica hizo más débil el eventual ataque populista al sector y más débil también su réplica.

Segunda: *los caracteres y la dimensión de la base física nacional y sus efectos en lo social, lo ideológico y lo económico*, marcada *durante el coloniaje*, en la índole fronteriza de la región; *durante la independencia y la anarquía y el período de "desarrollo hacia afuera"*, por la erección de una nacionalidad con escaso sustento de poder material, en continuidad social, ecológica e ideológica con las naciones vecinas y expuesta a las distintas afinidades y atracciones que de ellas emanaban. *Durante el período de modernización radical* esa constante se marcó en la insuficiencia de un mercado adecuado para la expansión industrial (y la correlativa permanencia del esquema exportador-importador), la parcialización de la "motivación nacional" en un partido político no-dominante y en una especie de "ideología nacional" identificada con contenidos político-partidarios e ideológicos de "compromiso". *Durante el período populista* la misma se señalará por la menor ambición autonomista del "modelo desarrollista" correlativa a la inadecuación cada vez más ostensible del mercado para un crecimiento autosostenido pero también en la menor virulencia dinamizadora de una ideología de tipo nacionalista y antimperialista.

Tercera: *la importancia de un sistema bipartidario estable, de las estructuras jurídicas que más tarde lo consoliden y de la emergencia de un elenco o personal político unificado.* Todos estos conexos determinantes se marcaron *desde el período de independencia y anarquía* por su alto poder de socialización y movilización de la masa nativa, por su flexibilidad para acoger diversos contenidos, intereses e ideologías así como también para albergar bajo la cúpula caudillesco-partidaria y a distintos niveles diferentes grupos sociales. *Durante la etapa de "desarrollo hacia afuera"*, manteniéndose estas capacidades (aunque algo debilitada la última respecto a los sectores sociales más altos) se pronunciará, en cambio, muy claramente la aptitud para una socialización política efectiva de los sectores extranjeros (que ya tenía sus antecedentes en los años 1838 a 1851). Igual aptitud para la socialización política del sector armado —y cancelándolo así como fuerza independiente— mostró una de las dos alas del sistema partidario, la colorada, desde el tercer tercio del siglo pasado. *En el período de modernización-radical* habrá que agregar sólo a los invariados datos anteriores el compromiso partidario y social involucrado en el proceso de transformación institucional que se cumplió entre 1916 y 1931 así como la función estabilizadora de esas nuevas estructuras[81]. También su probada flexibilidad para acoger sin quebrarse contenidos y tendencias supervinientes —caso, sobre todo, de las radicales que se pronunciaron en el batllismo. Y aun podría agregarse: una legitimación del "gobierno de partido" que hasta entonces había sido muy discutible y que se obtuvo a través de la constitucionalización o legalización de arbitrios que hacían de la oposición —normalmente medio país en términos políticos— una condición respetada y retribuida en posiciones de valor muy sustancial. Esa misma consistencia de las estructuras político-partidarias así como la del compromiso que forzosamente comportaban se mostrará en toda su saliencia *durante el intervalo dictatorial (1933-1938)*, un estilo de acción estatal más bien propicio a arrasarlas o, por lo menos, a dañarlas. *Durante el período populista* se pueden registrar las mismas permanencias: estructuras político-partidarias exteriormente firmes, compromiso social y político, personal o elenco común y estable. Pero en el tipo de acción gubernamental que el populismo representó o en el desenlace que en otros países tuvo, hay que destacar dos invariantes de alto poder de atenuación: 1) la previa y considerable movilización y participación políticas que explica la posterior inexistencia de sectores sociales en violento ritmo de incorporación al sistema; 2) la marginalidad del sector militar como grupo social con puntos de vista específicos, un fenómeno al que ya se hizo referencia. Y los mismos rasgos, por fin, permanecieron y atenuaron la factible máxima intensidad de *la etapa neoautoritaria*.

Cuarta: *la relativa debilidad de las estructuras de dependencia (o interdependencia asimétrica). Para todos los períodos a partir de las guerras de secesión y civiles* actuaron como determi-

(81) Es el caso del Consejo Nacional de Administración y la representación proporcional y el voto secreto (artículos 9 y 82) consagrados por la Constitución de 1917, de la ley de Registro Cívico Nacional Permanente y Corte Electoral del 9 de enero de 1924, de la de Elecciones, de 16 de enero de 1925, y de la electoral, de 22 de octubre del mismo año, etc.

nantes un tipo de economía con base de propiedad "nacionalmente controlada" (es decir, no "economías de enclave") [82] y el eminente valor estratégico —en términos militares pero sobre todo navales— más que económico del área oriental. A ello habría que sumar, *a partir del período de modernización-radical* la existencia de un importante sector nacionalizado *y al hacerlo de la etapa populista* la magra y poco atractiva dimensión del mercado desde el punto de vista de una inversión extranjera masiva, sustancial. Todo esto no excluye, como es obvio, múltiples y aun poco visibles corrientes de regimentación y copamiento: el término "relativo" y su raíz comparativa deja suficiente espacio para ellas.

Quinta: *la relevancia motivadora y sustentadora de una firme línea modernizante*, de sesgo "iluminista" primero, liberal después, democrático-radical más tarde, con su corolario de legitimación "racional-legal" en el sentido weberiano de la expresión. *Durante el período colonial* tuvo alta correlación con la tardanza de la implantación religioso-administrativa española; *durante el período de independencia y anarquía* hizo más fácil (y se hizo más fácil) con las influencias "ilustradas" dentro de la Iglesia uruguaya, la acción temprana de la Masonería y el republicanismo-radical de algunos grupos inmigratorios artesanos (franceses, italianos); *en la etapa del "desarrollo hacia afuera"* se robusteció con la rigidez constitucionalista y formalista del "principismo" pero, más sustancialmente, con la cohonestación ideológica liberal-democrática a la que apeló el sector social superior políticamente "blanco" y desplazado desde la década del 70. *Durante el estadio de modernización-radical* los mismos contenidos, a un tiempo ahondados y extremados, se identificaron en cierta y considerable medida con el compromiso político-partidario alcanzado y ambos con una especie de "doctrina nacional" casi indiscutida [83]. Y aquí

(82) No faltarían razones para sostener que el Uruguay se estaría acercando a la condición de una economía ganadera de "enclave", un proceso marcado por síntomas como la desnacionalización de su propiedad, la re-extranjerización de la propiedad frigorífica, el sacrificio del consumo interno con precios prácticamente equiparados a los de la exportación, las prolongadas vedas, etc.

(83) Aun habría que agregar que de esta "doctrina nacional" no se apartó siquiera sustancialmente la expresión político-social del catolicismo, que durante toda la primera mitad del siglo, desde Zorrilla de San Martín, la élite cívica —Dardo

es de nuevo que hay que hacer referencia al alto grado de integración del sector de la fuerza armada en el sistema, al que la ideología y la especial modulación solidarista que representó la Masonería dotó de fuerte consistencia. Todos estos determinantes, por fin, mostraron su acción amortiguadora *durante el intermedio dictatorial, la etapa populista y la redefinición neoautoritaria* aunque, claro está, a lo largo de diferentes y aun contradictorios modos de inferencia [84].

Sexta: aunque no la menos decisiva, *la amortización del disenso social y de la marginalización de los sectores más desheredados*. Ya es tema reiterado en nuestra historiografía social el papel que en esto jugaron las a medio "conquistas", las a medio "concesiones" de la *etapa de modernización radical* y su impacto amortiguador en las décadas que la siguieron. Ello tanto en el sentido de dotar de menor explosividad al *período de tono populista* y hacer menos estentóreo el tono de las demandas de los sectores con niveles fuertemente reprimidos de aspiraciones (menores en general los peligros que al "statu quo" social parecían amenazar) como en el sentido de generar un conformismo a cuyos significado y efectos ya se hizo reiterada referencia.

Regules, Secco Illa, Antuña, etc.— y figuras de otros partidos —caso de Gustavo Gallinal— mantuvo una inequívoca entonación democrática y antiautoritaria.

(84) Se hace referencia a los efectos de la ideología entendida como un "sistema de deducciones" y que entrelazándose a otros tipos de motivación actúan sobre los comportamientos de la persona y del grupo.

BIBLIOTECA
ARTURO E. RODRIGUEZ ZORRILLA

INDICE

Presentación 7
Prefacio 9
1. Sobre el concepto de amortiguación 11
2. Una implantación colonial débil y tardía 17
3. Unos "tiempos revueltos" muy costosos 23
4. Distorsiones en el esquema neo-colonial 31
5. Modernización y democratización en formato pequeño . 43
6. Una reacción débil, corta y conflictual 54
7. Un "populismo" apenas identificable 58
8. Un endurecimiento graduado 66
9. Una salida también imprecisa 81
10. A modo de sumario 90

Se terminó de imprimir en Prisma Ltda.
Gaboto 1582, Montevideo, Uruguay,
en noviembre de 1984
Edición amparada al art. 79 de la ley 13.349
(Comisión del Papel). D.L. 204.352